

**MARCELO GÓMEZ\***

**LA ACCIÓN COLECTIVA SINDICAL Y LA  
RECOMPOSICIÓN DE LA RESPUESTA  
POLÍTICA ESTATAL EN LA ARGENTINA  
2003-2007**

**UN PUNTO DE PARTIDA TEÓRICO:**

**REPOLITIZANDO EL ANÁLISIS DE LA ACCIÓN COLECTIVA SINDICAL**

Dentro de la reflexión teórica sobre el sindicalismo en las democracias capitalistas, Offe y Weisenthal (1992) han subrayado la dinámica específicamente política constitutiva de la acción colectiva sindical. En tanto que las organizaciones sindicales asumen el carácter de una institucionalización del descontento, la acción colectiva sindical y el poder político son presa de una dialéctica convergente y contradictoria al mismo tiempo. La acción sindical está atravesada por una lógica bivalente: movilización/negociación o acción colectiva desafiante/capacidad política institucionalizada. Según este planteo, la actividad sindical se somete a un inevitable vaivén entre el recurso a la movilización de demandas, la gestación de solidaridad y voluntad de lucha, y la necesidad de consolidar los logros obtenidos a través de organizaciones estables reconocidas por el poder

\* Sociólogo. Magister en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Profesor titular de Sociología de los Movimientos Sociales, Universidad Nacional de Quilmes/Argentina.

político como capaces de controlar el potencial de acción colectiva. La capacidad de acción colectiva muta en poder de limitar/controlar el potencial de movilización y en poder de garantizar, por medio de la negociación y el compromiso, la regularidad de la producción a cambio de beneficios que muchas veces son de largo plazo. En definitiva, el poder de interlocución/presión/amenaza de las organizaciones reconocidas -un poder eminentemente político- se vuelve un sustituto eficaz de la movilización efectiva de la base. Sin embargo, en la medida en que se extingue esta capacidad de acción colectiva, se suele agotar también la capacidad negociadora de la organización o, en su defecto, la organización pierde el reconocimiento por parte de otros actores poderosos, lo que obliga a reiniciar el ciclo volviendo a la fase de acción colectiva. La lógica de la administración del descontento y de la representación del descontento se realimentan y limitan sucesivamente.

En un sentido similar Hyman (1991) ha señalado la duplicidad de la gestión del descontento que conlleva dos roles contradictorios: lucha y movilización, y compromiso y negociación. Las organizaciones sindicales se alimentan de demandas no resueltas, necesidades no satisfechas y aspiraciones no realizadas pero en tanto interlocutores reconocidos por actores más poderosos deben ser capaces de autorregular los motivos del descontento y establecer compromisos.

Ya de manera más directamente política Pizzorno (1991) ha señalado en su recordado trabajo, las diferencias pero al mismo tiempo las relaciones entre negociación colectiva y negociación política como tipos de intercambio en donde la interrupción de la producción o su amenaza no es solo un costo patronal, sino que puede convertirse en un daño político en tanto expresión de la ausencia de consenso sobre el orden vigente. De esta forma los sindicatos participan también en un *mercado político*. De hecho una línea importante de los análisis de las particularidades del sindicalismo argentino (Bunel, 1992) ha sido su nítido papel político a través del peronismo y el hecho de aunar lo reivindicativo y lo político de manera estrecha.

A diferencia de los movimientos sociales de carácter horizontalista y débilmente institucionalizados, que surgen desafiando a los sistemas vigentes de intermediación de intereses y eventualmente pugnan por incorporarse a ellos, los sindicatos forman parte de esos sistemas y sus acciones colectivas tienen la particularidad de verse más condicionadas. Sin embargo, esto no significa que en muchas circunstancias la movilización desafiante para ser efectiva debe abandonar -aunque sea temporal o parcialmente- el campo de las reglas institucionalizadas o convencionalizadas del conflicto social.

En este sentido, la experiencia argentina -no solo la reciente- es rica en mostrar fenómenos de rebasamiento de los marcos institucionales para la acción colectiva sindical en la medida en que la respuesta política estatal, el intercambio planteado en el nivel del mercado político, es insuficiente para satisfacer las demandas que las organizaciones sindicales pretenden representar.

En esta presentación vamos a comenzar intentando desarrollar un dispositivo conceptual para analizar la respuesta estatal a la acción colectiva sindical y describir cómo se ha dado el interjuego entre ambas en las etapas de implementación, consolidación y crisis de las reformas neoliberales al capitalismo argentino en los años noventa, y sobre todo en el proceso posterior de relegitimación de la autoridad política y de recomposición de las capacidades efectivas de gobierno.

#### UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA RESPUESTA POLÍTICA ESTATAL

##### A LA ACCIÓN COLECTIVA

Profundizando en el análisis de esta dialéctica que une al Estado con la acción colectiva contestataria, Kriesi (1999) plantea cómo los contextos políticos y la acción estatal inciden sobre la estructura organizacional de la movilización colectiva y que el Estado, visto desde ella, es caracterizado en dos dimensiones: fuerte/débil en tanto su capacidad de imponer decisiones, y excluyente/incluyente, en tanto contempla o niega reconocimiento y/o concesiones.

Offe (1996) ya había resaltado la cuestión de la variedad de las respuestas estatales a los nuevos movimientos sociales. Así, extendiendo este análisis al sindicalismo, pueden señalarse dos dimensiones por las que transita la respuesta estatal: a) el plano del *reconocimiento* según el cual los detentadores del poder estatal aceptan o rechazan a las organizaciones, los representantes, y/o los líderes de los movilizadores, es decir, en qué medida el estado los toma en consideración, de qué modo los interpela o cómo los incluye o excluye de los procesos de decisión; y b) el plano de las *concesiones*, es decir, en qué medida las políticas y medidas de los detentadores del poder estatal contemplan o toman en consideración positiva o negativamente las demandas o reclamos; en otras palabras: de qué modo aceptan o rechazan las reivindicaciones o intereses de los grupos sindicales movilizadores y cómo los incluyen o excluyen en el contenido de sus decisiones.

A su vez, cada uno de estos planos de la respuesta estatal (cuadros 1 y 2) puede ser caracterizada de acuerdo con el grado de fortaleza o debilidad que muestre. Aquellas respuestas que muestren capacidad de imposición, de condicionamiento o de iniciativa sobre

los gremios y las acciones desafiantes pueden ser llamadas *activas*. En cambio podemos llamar *pasivas* aquellas respuestas donde el estado se limita a intentar no dejarse condicionar por los movimientos y sus acciones cediéndoles la iniciativa. El *no reconocimiento* puede variar desde formas activas como el rechazo liso y llano, la represión y la persecución, hasta formas pasivas como las mil y un maneras de desgaste. Asimismo, el *reconocimiento* puede adoptar una forma activa de plena integración institucionalizada, pasando por diversos grados de negociación, interlocución y eventualmente alianza o cooptación. Las diversas formas de inclusión pueden otorgar desde la aceptación de una capacidad de veto, hasta la participación con decisión en la gestión estatal (con diversos niveles de importancia y autonomía), pasando por diversas alternativas intermedias.

**Cuadro 1**  
Tipología de respuesta estatal de reconocimiento a las organizaciones sindicales movilizadas

RESPUESTA ESTATAL	TIPOS	Subtipos
NO RECONOCIMIENTO (Rechazo, antagonismo)	ACTIVO/ FUERTE	<i>Represión</i> : legal/ilegal, dura/blanda, cruenta/incruenta, preventiva/punitiva, reactiva/ofensiva, selectiva/difusa (Della Porta, 1999)
		<i>Persecución</i> : prohibiciones y sanciones administrativas, judiciales, políticas, condenas ideológicas, etcétera
	PASIVO/ DEBIL	<i>Bloqueo</i> : restricciones de acceso a recursos, a información, a oportunidades de participación; aumento de los costos de movilización, incentivos negativos
		<i>Provocación, sabotaje</i> : buscando reacciones y radicalización que los aisle y facilite la formación de una imagen negativa en la opinión pública <i>Debilitamiento y disgregación</i> : fomentando contradicciones y divisiones, interviniendo en las divergencias gremiales internas, "comprando líderes", alentando o fortaleciendo grupos rivales
RECONOCIMIENTO (Aceptación)	PASIVO/ DEBIL	<i>Descompresión</i> de conflictos, instrumentación como "válvulas de escape" o "desahogo de descontentos"
		<i>Dilación</i> , búsqueda de tiempo, "simulación de negociaciones", incumplimiento de acuerdos <i>Desviación</i> , distracción: introducción temas o dificultades artificiosas que obstaculizan u obligan a la acción sindical a apartarse de sus reivindicaciones iniciales
	ACTIVO/ FUERTE	<i>Inclusión formal</i> estableciendo procedimientos e instancias institucionalizadas y regulares de participación, negociación, asunción de cargos, etc.
		<i>Inclusión informal</i> por medio de contactos frecuentes, consultas y diálogo no institucionalizado <i>Reconocimiento de poder de veto</i> <i>Reconocimiento de poder de decisión</i> en diversos niveles de administración, gestión, etc.

**Cuadro 2**  
Tipología de respuesta estatal de concesiones a la movilización sindical

RESPUESTA ESTATAL	TIPOS	Subtipos
NO CONCESIONES	ACTIVO/ FUERTE	<i>Disciplinadoras</i> : medidas que profundizan el descontento con insistencia redoblada de las políticas y medidas impugnadas por la acción sindical; suponen una deslegitimación explícita de las demandas
		<i>Encubiertas</i> : insistencia en las orientaciones cuestionadas pero disfrazándolas, intentando no colisionar o antagonizar explícitamente con las demandas y reclamos sindicales (apelando a supuestos "malosentendidos", negando posibles consecuencias dañinas, etc.)
CONCESIONES	PASIVA/ DEBIL	<i>Mitigación por reducción</i> de los costos de las políticas fundamentales como intento de bajar el descontento
		<i>Paliativos o medidas complementarias excepcionales</i> que sin alterar las políticas fundamentales intentan compensar sus costos
	PASIVA / DEBIL	<i>Ventajas o incentivos sustitutos</i> intentando desalentar la oposición hacia las políticas fundamentales que se mantienen inalteradas
		<i>Maximización de beneficios</i> : busca conquistar apoyo o al menos aceptación de la orientación principal de las políticas sobre la base de expandir beneficios a los potenciales descontentos con las mismas
CONCESIONES	ACTIVA/ FUERTE	<i>Reformas o medidas sectoriales, específicas o puntuales</i> para satisfacer parcialmente las demandas
		<i>Reformas o medidas integrales</i> que apuntan a dar una satisfacción general a los movilizadores, eliminando la base del descontento, y generando apoyo <i>Cambios en las orientaciones generales</i> de la política estatal que son articulables con los intereses y preferencias de los sectores sindicales movilizadores

En el plano de las *concesiones* puede plantearse una variabilidad similar: desde una política activa de no concesiones con insistencia en políticas antagónicas incompatibles con los reclamos, hasta una política activa de plena aceptación de los mismos impulsando reformas destinadas puntualmente a satisfacerlos, pasando por formas pasivas de medidas compensatorias, paliativas, etc.

El esquema permite esperar una cierta correspondencia "natural" entre las respuestas de ambos planos: el rechazo o las políticas antagónicas con las demandas se asocia a respuestas represivas, en tanto las políticas reformistas pueden asociarse con diversos niveles de integración e institucionalización.

Sin embargo, los detentadores del poder político estatal pueden también intentar llevar adelante algunas estrategias oblicuas o

sinuosas: a) evitar responder o rechazar los reclamos o demandas, no realizar concesiones significativas, pero ofrecer una inclusión formal o un fuerte reconocimiento; y b) intentar desarrollar una política de concesiones a las demandas manteniendo estrategias de no reconocimiento activas (persecución y represión) o pasivas (desgaste).

El esquema analítico que proponemos ofrece dos parámetros elementales para tomar en consideración en las coyunturas políticas como determinantes de la respuesta estatal frente a la acción colectiva sindical: la *disponibilidad de recursos* (del Estado en particular y de la economía en general) para otorgar concesiones, y el *nivel de consenso* de que goza el gobierno y marca sus necesidades de apoyo y su predisposición a brindar reconocimiento. El primero está dado por el momento ascendente o descendente del ciclo económico y las finanzas estatales, y el segundo viene definido fundamentalmente por el apoyo electoral, de la opinión pública, y de los factores de poder y grupos de interés dominantes.

Con cierto apresuramiento se ha juzgado que en el caso de la Argentina la reforma neoliberal de los años noventa ha desmantelado o reducido de manera irreversible la capacidad de respuesta estatal a las demandas sociales, y ha dañado severamente las bases de poder del movimiento sindical. La espiral ascendente de acción colectiva de protesta protagonizada por actores sociales novedosos (piqueteros, asambleas barriales, ahorristas estafados, empresas recuperadas por sus empleados, etc.) total o parcialmente ajenos a los sistemas institucionalizados de intermediación de intereses se asocia a una crisis profunda de las capacidades estatales (Sidicaro, 2002) y terminaban por desplazar la tradicional preeminencia sindical sobre la acción colectiva reivindicativa dirigida al Estado. Pero el carácter destituyente de la acción colectiva generalizada que se extiende entre los años 2001 y 2002, fue seguido por un período de fortalecimiento del sistema político institucional, de la mano de cambios en los liderazgos y en las orientaciones de las políticas estatales y de respuestas frente a los sectores movilizados. Simultáneamente, en los últimos años el protagonismo tanto político como reivindicativo que ha asumido el sindicalismo en la poscrisis lo ha repositionado fuertemente en la escena política.

Veamos cómo se desarrolló en el largo plazo que va de las reformas neoliberales de los años noventa hasta el actual período de recuperación política y económica, este proceso de condicionamientos recíprocos entre acción colectiva sindical y respuesta estatal de reconocimientos y concesiones, buscando un patrón que permita tipificar coyunturas y asociar cambios en las estrategias de

respuesta política estatal con los cambios en los repertorios de acción colectiva sindical.

#### LA RESPUESTA ESTATAL A LA ACCIÓN COLECTIVA SINDICAL DURANTE LOS AÑOS NOVENTA

El proceso de reforma del capitalismo argentino bajo los parámetros del neoliberalismo ha sido analizado de manera algo monótona como imperio del mercado desregulado y desaparición de la intervención estatal que arrojaba de manera espontánea un inhibidor natural de la acción colectiva sindical: el desempleo, que reduce la fuerza social y opaca el papel político de las organizaciones gremiales. Sin embargo, a medida que analizamos la dinámica de reconocimientos y concesiones frente al actor sindical a lo largo de la implementación, la consolidación y la crisis de las reformas, podemos ver que el proceso no fue tan lineal.

#### RESPUESTAS HIPERACTIVAS FRENTE A LA CRISIS: NADA DE CONCESIONES PERO FUERTES RECONOCIMIENTOS SELECTIVOS

La etapa que comienza con la asunción de Carlos Menem y termina en el Plan de convertibilidad (julio/89 a marzo/91) se caracteriza por ser una coyuntura compleja en términos de nuestros parámetros determinantes de las estrategias de reconocimientos y concesiones. La crisis hiperinflacionaria y el quebranto del erario público mostraban una extrema carencia de recursos para ensayar concesiones, pero el presidente gozaba de una sólida legitimidad electoral, y al mismo tiempo concitaba un fuerte apoyo -pocas veces alcanzado- entre amplias franjas de la población y los grupos de poder económico más importantes en torno a un programa de reformas de inspiración neoliberal: desregulación, privatización y apertura.

La estrategia general explícita de avanzar con la reforma “sin concesiones” hacia los afectados, fue elocuentemente graficada por las metáforas esgrimidas varias veces por Menem: “cirugía mayor sin anestesia”, “vuelo sin paracaídas”, y “el único camino en el mundo”. La mística reformista y la estrategia activa de no ceder a las demandas de los perdedores movilizados asumieron formas de extrema dureza recurriendo a una sucesión de gestos políticos irritativos incluso para los propios aliados<sup>1</sup>. Para tener una idea del alcance *disciplinador* de la política de no concesiones basta recordar el dato de que el 60% de los decretos de necesidad y urgencia sancionados

<sup>1</sup> Mencionaremos dos de los más impactantes: la designación de María Julia Alsogaray (dirigente de un partido ultraliberal e hija de un viejo político ferviente antiperonista) al frente de la privatización de la empresa nacional

por el Poder Ejecutivo en 1989 fueron de control salarial y de limitación en la aplicación de los convenios colectivos de trabajo como forma de combate contra la inflación (Palermo et al., 1996: 263).

Sin embargo, la sequedad extrema en materia de concesiones era compensada por un gobierno peronista que había logrado edificar una heterogénea “coalición reformista” (Etchemendy, 2001) con una arquitectura sustentada en el uso intensivo de estrategias de reconocimiento activas hacia sectores importantes del sindicalismo argentino. Un sector minoritario de las cúpulas sindicales (el grupo de los “15”) plantea lisa y llanamente “coincidencias estratégicas” con la agenda reformista convirtiéndose tanto en apoyo político como en usina ideológica de la reforma del capitalismo argentino bajo los parámetros posmuro de Berlín y predominio neoconservador en el mundo. A este sector se le cede nada menos que la cartera laboral<sup>2</sup>. A otro sector significativo del movimiento obrero (el barrionuevoismo) se lo conquista con prebendas del tamaño de la administración de la seguridad social y del servicio de salud para los jubilados y pensionados –cajas presupuestarias muy importan-

---

de telefonía (ENTEL) primero y de la principal acería estatal (SOMISA) después; y la reglamentación del derecho de huelga (decreto PEN 2184/90) que incluye severas restricciones a las mismas en servicios públicos (increíblemente incluye el *clearing* bancario dentro de los “servicios esenciales”) que se da a conocer el 17 de octubre, fecha emblemática para las conquistas del movimiento obrero peronista.

2 Jorge Triaca, sindicalista plástico de importante trayectoria dentro del sindicalismo “participacionista” o dialoguista, fue uno de los más firmes impulsores de una política de reformas y uno de los principales detractores del “viejo modelo sociopolítico” y del sindicalismo “corporativo” y “sin propuesta” ante “los nuevos tiempos”. Impacta el papel que asumieron algunos líderes sindicales en la arquitectura y la justificación ideológica de la reforma del capitalismo. La descomposición del imaginario del movimiento obrero argentino surge inicialmente en gran medida de un sector significativo de sus dirigentes, históricamente conocidos como “participacionistas” (Fernández, 1998). Algunos sindicalistas caracterizaban la etapa como “de construcción de un nuevo bloque de recomposición del capitalismo” y de agotamiento del modelo de pujas corporativas en el terreno del estado. “Los 15” tenían el mérito de compartir con Menem un mismo diagnóstico de la situación: “crisis terminal del sistema socioeconómico”. “Nada de lo que ocurre en la Argentina puede ser entendido si no nos damos cuenta que está naciendo un nuevo bloque de poder social, político, económico y quizás militar...y que Menem está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias ...para comenzar con las tareas de la reconstrucción del capitalismo argentino”, declaraba Triaca (Ver *El Cronista Comercial* (Buenos Aires) 9 de setiembre de 1989).

tes del Estado nacional-. Y por último, a sectores del sindicalismo estatal (UPCN, FOECYT, Luz y Fuerza) se les ofrece participación en las decisiones de reestructuración y privatización estatal.

El resto de la dirigencia sindical tradicional (el “miguelismo”) y combativa (los docentes, telefónicos, y otros gremios del sector público, el “ubaldinismo”) es objeto de formas pasivas de no reconocimiento, dilaciones, desgastes, promesas o pequeñas y simbólicas concesiones referidas a la situación deficitaria de las obras sociales sindicales. Era evidente que la política de no concesiones se acompañaba de una fuerte política de reconocimientos selectivos que permitieran prevenir un emblocamiento que resistiera la implementación de las reformas y al mismo tiempo se evitaba toda forma de confrontación abierta con los sectores que rechazaban el rumbo elegido.

Los datos sobre la acción colectiva sindical para los años 1989 y 1990 (Villanueva, 1993; Centro de Estudios Nueva Mayoría, 1992) tienden a relativizar la hipótesis de una subordinación generalizada de la acción reivindicativa de los sindicatos a sus posicionamientos políticos frente al gobierno justicialista. El comportamiento reivindicativo no sufre variaciones significativas respecto del vigente durante el último año de gestión de R. Alfonsín: el eje de la acción reivindicativa seguía siendo los salarios y el recurso principal las huelgas.

Si bien no se producen convocatorias a huelgas generales por parte de las centrales sindicales (CGT-San Martín, “oficialista”; y CGT-Azopardo, “combativa” aunque no netamente opositora), no puede afirmarse que haya existido una “tolerancia” especial al gobierno menemista en materia reivindicativa, y mucho menos que haya habido una reducción de la conflictividad y las acciones colectivas: el sector industrial seguía teniendo una participación mayoritaria en el total de conflictos, surgen novedosos y no menos agudos conflictos por las privatizaciones iniciales que ofrecen una enconada resistencia. Es decir, al patrón anterior de acción colectiva reivindicativa, comienza a sumársele algo nuevo, sin mayores antecedentes: la resistencia fallida a las privatizaciones con un costo muy elevado tanto para las bases obreras como para las cúpulas sindicales encargadas de impulsarlas frente a un gobierno al que habían comenzado apoyando.

Las acciones colectivas más disruptivas como tomas de edificios públicos, bloqueos de aeropuertos, huelgas ferroviarias prolongadas, no fueron respondidas con represión pero tampoco con concesiones ni apertura de instancias de negociación significativas. La estrategia de desgaste ante la opinión pública y los medios de

comunicación pareció ser el recurso principal que sirvió para aislar y finalmente doblegar las resistencias en casos testigos de privatizaciones como los fuertes conflictos de los trabajadores telefónicos, aeronavegantes y ferroviarios.

**EL EXITOSO PLAN DE CONVERTIBILIDAD Y EL CAMBIO FRENTE AL SINDICALISMO: CONCESIONES PASIVAS Y NO RECONOCIMIENTOS**

A partir de mediados de 1991, con el Plan de convertibilidad, la conquista de la estabilidad monetaria, y una fuerte reactivación económica que se extendió hasta la crisis del *Tequila* a comienzos de 1995, la respuesta estatal mutó de manera importante y el último tramo de la implementación de las reformas se realizó en un contexto completamente diferente.

Con un visible apoyo electoral ratificado en las elecciones legislativas y consenso en la opinión pública, pero ahora con mayores recursos fiscales disponibles y crecimiento económico, la política de no concesiones activa fue atenuándose mediante una estrategia de compensaciones para los afectados por las reformas y de políticas sociales más activas para paliar las consecuencias iniciales de su implementación.

La ley nacional de Empleo 23013/91, las propuestas de políticas pasivas de empleo con la baja de costos laborales y cargas sociales para los empleadores privados (Programa de Empleo Privado, más tarde reducción diferencial de cargas sociales), y los subsidios a la capacitación (Proyecto Joven) para incrementar la “empleabilidad”, eran las políticas acordes a la *“supply side economy”* en vigencia, junto a las primeras políticas activas de empleo con componentes asistenciales como los Programas Intensivos de Trabajo (PIT).

Un elemento importante de concesiones pasivas de carácter compensatorio eran los Programas de Propiedad Participada<sup>3</sup> para los trabajadores que conservaban sus empleos en las empresas privatizadas. Los grandes operadores privados multinacionales a cargo de las empresas de servicios públicos aportaban lo suyo a esta política de compensaciones: achicaban la planta no mediante despidos unilaterales sino ofertando montos indemnizatorios superiores a los fijados legalmente para los que aceptaban “desvincularse”, estimulados por tentadoras ofertas de “retiro voluntario”. En otros casos se brindaban facilidades para la formación de microempresas

3 Otorgaban a los trabajadores el 10% del paquete accionario bajo una figura particular “acciones clase C” no transferibles, lo que los hacía partícipes de las ganancias futuras de las empresas. Luego de muchos años, a partir de 1999 se permitió la venta de las acciones extinguiendo el programa.

proveedoras integradas por el personal desvinculado, a las que ofrecían contratos asegurados por un par de años.

La persistencia de la conflictividad laboral de los bancarios, los jubilados, los docentes y los transportistas muestran también un respuesta estatal diferente: aumentos salariales, la ley federal de Educación que intenta preservar el presupuesto educativo, la introducción de máquinas expendedoras de boletos que alivianan el trabajo de los choferes, y sobre todo la renuncia del ministro Antonio Salonia (adalid de la privatización de la educación) ante la avalancha de conflictos docentes y la repercusión, que tuvo un formato de protesta con alto impacto mediático (la “marcha blanca”) con la convergencia de columnas de docentes, padres y alumnos de todo el país hacia la Plaza de Mayo<sup>4</sup>. Aunque no puede decirse que se trató de un reconocimiento de poder de veto a las políticas del gobierno, la renuncia de Salonia mostraba por vez primera la vulnerabilidad política a una acción colectiva sindical no convencional.

Pero la política de concesiones parciales, incentivos adicionales y paliativos, es acompañada por una reducción en los niveles de participación de varios sectores de la dirigencia sindical en el poder político. El advenimiento de Domingo Cavallo al ministerio de Economía supone no sólo una pérdida de espacio y poder de decisión del sector aliado del sindicalismo en la cartera laboral y en la seguridad social, sino también cambios adversos en las agendas de negociación por la inclusión de la reforma laboral integral (la llamada “flexibilización”).

La pérdida de reconocimiento fuerza una respuesta de la dirigencia tradicional nucleada en la CGT, que se reagrupa (incluyendo a algunos dirigentes menemistas) y realiza el primer paro nacional en noviembre de 1992, aunque inmediatamente entre a dialogar detrás del objetivo de dilatar los plazos de la reforma laboral y sobre todo conseguir auxilio financiero para las obras sociales sindicales, cosa que finalmente conseguirá con la emisión de un bono por 400 millones de pesos para cancelación de deudas. La agenda reformista comienza a incluir *compensaciones e incentivos sustitutos* para las organizaciones sindicales: participación en negocios de privatizaciones, desregulación de las obras sociales, y jubilación privada<sup>5</sup>.

La acción colectiva sindical aún continuaba siendo la instancia fundamental de canalización de demandas pero convalidando la

4 Los incidentes desencadenados por desconocidos encapuchados y la posterior represión policial generaron reacciones contrarias al gobierno, mostrando una vez más la inconveniencia de adoptar respuestas de este tipo (represión difusa y con elementos turbios de ilegalidad).

estrategia estatal de concesiones pasivas y compensaciones a cambio de apoyo o “tranquilidad” para lograr completar las reformas: los conflictos ante la privatización de la acería SOMISA y luego de la petrolera YPF fueron encarados con diversas combinaciones de negociación y acción colectiva por los sindicatos metalúrgicos (UOM) y petroleros (SUPE), pero finalmente los reclamos terminaron pivoteando sobre aumentos en el monto de las indemnizaciones o sobre los contratos para microempresas de ex empleados, sin trabar en ningún momento el proceso privatizador como habían intentado los telefónicos o los aeronáuticos. Es decir, las luchas se orientan hacia la obtención de los incentivos o beneficios adicionales más que a detener las políticas en curso. Lo novedoso en términos de acción colectiva es que sin salir del marco de la inevitabilidad de las privatizaciones estos conflictos inauguran repertorios de protesta que luego serían recuperados por diversos sectores sociales: desde las asambleas “abiertas” a la población en la puerta de las empresas, los acampes, las marchas “largas”, hasta la toma de plantas para impedir el apagado de un alto horno y el “escrache” no exento de violencia de la casa particular del interventor privatizador, nada menos que el citado dirigente gremial Jorge Triaca.

Muy bien podría decirse que la implementación de las reformas estructurales durante la etapa expansiva del Plan de convertibilidad también fue la etapa de “incubación” de nuevas formas de acción desafiante y posicionamientos sindicales frente al gobierno (Gómez, 2007). Veamos algunos conflictos paradigmáticos en el sentido de que se apartan de los patrones de acción colectiva y estrategias convencionales de la acción reivindicativa sindical en la Argentina y preanuncian procesos que se harían más visibles años después.

Conflictos como el del cierre de la mina de HIPASAM en Río Negro en 1992, convertido en una suerte de pueblada pacífica, la violenta pueblada encabezada por empleados públicos en Santiago del Estero<sup>6</sup> a fines de 1993 y, sobre todo, el conflicto metalúrgico en Tierra del Fuego en 1994 que se extendió por varias semanas y rápidamente adoptó formas muy organizadas de lucha, incluyendo por primera vez los piquetes en rutas y calles, preanunciaban

5 Respecto de esto pueden verse los casos estudiados por Murillo (1997) y Etchemendy (2001) para algunos sectores sindicales.

6 El carácter anunciante de los cambios que se avecinaban podemos ubicarlo en los últimos días de 1993, en Santiago del Estero, con la rebelión popular (Auyero, 2002) que arrasó literalmente con el gobierno provincial, edificios públicos y hasta algunas viviendas particulares de políticos y fun-

cambios en el escenario de la conflictividad (Gómez, 1997 y 2007a; Villanueva y ot, 2001). La “Marcha Federal” de agosto de 1994, en donde convergen por primera vez el conjunto de la oposición social al gobierno liderada por los gremios combativos, y a la que adhieren los partidos políticos opositores, deja a la CGT oficialista en soledad y muestra la posibilidad de que el sindicalismo tradicional deje de canalizar las demandas populares.

Hacia el final de la etapa expansiva del Plan de convertibilidad, pero mucho más con las consecuencias de la recesión *postequila*, los conflictos comienzan a adquirir significados y características nuevas. En esta etapa de crisis que se extiende entre 1995 y el fin de su mandato, se producen profundas mutaciones en la acción colectiva sindical y también fuertes oscilaciones en las respuestas políticas estatales.

Se observa un cambio significativo en las características de la conflictividad: es masiva, multisectorial, fuertemente disruptiva sobre todo en materia de ocupación y violencia contra edificios públicos, desafía o resiste la represión antidisturbios, y sus dirigentes locales intentan nuclearse en instancias regionales e intersindicales novedosas y no pertenecen ni parecen responder mecánicamente a las cúpulas sindicales tradicionales. Además, la crisis de muchas economías regionales y los quebrantos de los estados provinciales (atrasos salariales, pagos en bonos, cesación de pagos) agrega un contexto potencialmente explosivo: el jujeñazo que había logrado destituir al gobernador luego de jornadas con graves incidentes y heridos, parece replicarse al poco tiempo nada menos que en la provincia de Córdoba, donde tiene que renunciar el gobernador y líder del radicalismo E. Angeloz luego de varias jornadas de violencia y disturbios protagonizados fundamentalmente por empleados públicos. También se produjeron conmociones graves en Río Negro, Corrientes, Santiago del Estero, y en el año 1996 continuarían en Córdoba, Tucumán y todas la provincias del NOA.

A esta altura el gobierno se enfrentaba a un emblocamiento del conjunto de la dirigencia sindical donde hasta la CGT liderada por el menemista de la construcción Gerardo Martínez lanzó un paro general con movilización multitudinaria en agosto de 1995. El rebasamiento de la acción colectiva que desbordaba las estructuras gremiales y la absoluta esterilidad de las cúpulas sindicales para fre-

cionarios y que culminó con la intervención federal a la provincia y la cesión inmediata de ayudas sociales y los pagos de las deudas salariales del sector público. El “santiagazo”, como quedaría bautizado, sería la primera “pueblada”, la primera muestra de violencia ejercida contra los poderes públicos de manera incontrolada, irregular o amorfa.

nar los costos del ajuste en base a la negociación, hacían inevitable el regreso al recurso de la acción colectiva.

En agosto de 1996 se produce el desplazamiento del ministro Cavallo con lo que se esperaba una recomposición de las condiciones de diálogo al menos con algún sector de la CGT, pero la dinámica de la acción colectiva y la ausencia de ofertas o concesiones tentadoras mantiene la confrontación.

#### LA RESPUESTA CONCESIVA ATENUADA FRENTE AL NUEVO PATRÓN DE ACCIÓN COLECTIVA

En 1997 los grandes conflictos en Neuquén, Salta y Jujuy, donde los cortes de ruta se convierten en puebladas multisectoriales que duran varios días e incluyen episodios de violencia y represión que cobran la muerte de una mujer y varios heridos, impactan vivamente en la opinión pública.

Las protestas y movilizaciones no convencionales se convierten en poderosos medios de llegada a la opinión pública sin pasar por la cúpulas. La conflictividad tiende a desplazar el centro de gravedad político hacia la calle, alejándolo de los salones y las reuniones con funcionarios. Maniatados dentro de las empresas, sin cabida ni recepción en los poderes estatales y partidos políticos, las demandas populares tienden a expresarse adonde se hacen más visibles. Los acontecimientos de Cutral-Co, Plaza Huincul, Mosconi y Tartagal, Córdoba, Jujuy y la Carpa Blanca, entre otros, muestran una dirigencia sindical tradicional sin acceso o siguiendo “de atrás” estos conflictos, pero también muestra la vitalidad de muchas organizaciones y cuadros gremiales que, no debe olvidarse, promovieron audazmente nuevos repertorios de lucha.

Además, la multiplicación de organizaciones de desocupados tanto en aquellas provincias pioneras en las puebladas (Neuquén y Salta) como en Mar del Plata, La Plata, y su llegada al conurbano bonaerense en La Matanza y en el sur del GBA, obliga a intensificar la distribución de planes de empleo. Los Planes Trabajar como respuesta a las “puebladas”, procuran desagregar intereses mediante una *respuesta paliativa* diferenciada para el sector que había demostrado mayores capacidades de acción colectiva disruptiva, intentando desarticular la convergencia de demandas de los desocupados con los asalariados, los comerciantes, los productores rurales, y otros sectores afectados por la crisis.

Las crisis provinciales tienen costos políticos altos para el gobierno, con pérdida de apoyos sindicales: el gobierno debe soportar ahora una CGT unificada que en 1997 realiza nada menos que tres

paros generales, algunos incluyen convocatorias a medidas disruptivas no convencionales como los cortes de ruta y las ollas populares que en varios lugares del conurbano terminan en disturbios y represión policial.

A su vez, aparece por primera vez un palpable debilitamiento del gobierno en la opinión pública y en el electorado que se hizo evidente con los resultados electorales de octubre de 1997. La emergencia de una fuerza política opositora (FREPASO) y, eventualmente, de una convergencia antimemenista, operó un notable cambio de expectativas, que se vio reforzado por el triunfo de la oposición política en las elecciones legislativas bonaerenses del 26 de octubre<sup>7</sup>.

Sin embargo, a medida de que el conflicto social comenzó a modificar su morfología adoptando formas más disruptivas y alejadas de las dirigencias tradicionales, los líderes políticos opositores (C. Alvarez, G., Fernández Mijide, F. De la Rúa) decidieron situarse lejos del conflicto social y cifrar todas las esperanzas de cambio en la derrota electoral del menemismo y el acceso al gobierno. Aparece un desacople entre la “oposición política” y la “oposición social” al menemismo. Un sector significativo de la dirigencia combativa de origen peronista (MTA) apoya o hace gestos simbólicos de apoyo a las opciones políticas opositoras no peronistas, rompiendo una tradición de lealtades históricas.

Así, necesitado de apoyos, a partir de 1998 la política laboral de Menem deja de lado la agenda reformista neoliberal para intentar recomponer lazos con el sindicalismo removiendo de la cartera laboral a un cavallista e impulsando un proyecto que elimina varias figuras de la flexibilización laboral, congela el programa de desregulación de obras sociales y coquetea con un reconocimiento formal a la central sindical opositora (la CTA).

La respuesta estatal de módica combinación de concesiones y reconocimientos tendrá sus frutos: los años ‘98 y ‘99 muestran una merma en la conflictividad de los desocupados y menores niveles de confrontación con la dirigencia sindical que vuelve a dividirse entre dialoguistas y combativos.

<sup>7</sup> Sin embargo, no hay relación directa entre este resultado electoral y la situación social conflictiva. En provincias como Tucumán volvió a ganar el bussismo, en Jujuy, Salta y Tierra del Fuego, el PJ. Solamente en Santa Fe, Buenos Aires y Neuquén, el Justicialismo fue derrotado por la flamante oposición. En Córdoba y Río Negro volvió a ganar la UCR, ahora dentro de la Alianza.



**DE LA RÚA: DE LA PROMESA DE CAMBIOS A LA SUBRESPUESTA ESTATAL Y LA GENERALIZACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA**

Luego de la gran victoria electoral de la alianza antimnemista sobre el justicialista E. Duhalde, el presidente De la Rúa modificará la respuesta estatal a la movilización de los descontentos: la crisis fiscal, financiera y de vulnerabilidad externa de la economía es encarada con un regreso inesperado a las políticas de “no concesión activa” y de “no reconocimiento activo” al movimiento sindical con la confianza de que la elevada legitimidad electoral alcanzada en los comicios daba sustento suficiente para contener o enfrentar los reclamos gremiales<sup>8</sup>.

Las políticas de no concesión fueron drásticas: frente al sindicalismo se retoma la agenda reformista de la ortodoxia neoliberal impulsando nuevamente un proyecto flexibilizador a ultranza y se cuestiona a la dirigencia sindical “contaminada” por la corrupción menemista. Por si fuera poco se implementan políticas de reducción de salarios en el sector público y de las prestaciones para los planes sociales de los desocupados. De esta forma, el flamante gobierno descargaba sistemáticamente costos adicionales sobre los sectores que habían demostrado mayor capacidad de movilización y de acción colectiva disruptiva en el pasado: los empleados públicos y los desocupados.

Como puede verse en la tabla 1, la conflictividad laboral pega un salto inmediatamente no solo cuantitativa sino también cualitativamente merced la utilización de repertorios de lucha no convencionales de carácter fuertemente agitado.

El notable incremento en la movilización de los trabajadores sin empleo, se consolida a lo largo del año 2001, convergiendo en numerosas protestas con los gremios de empleados públicos y otros gremios de transporte y servicios. Los desocupados duplican con creces su participación en la conflictividad (llegando al 14,3%) y alcanzan un grado de coordinación organizativa de nivel nacional (Asamblea Nacional Piquetera) obteniendo apoyo tanto de la CTA como de la CGT combativa.

8 Incluso a una semana de asumido el gobierno se produce un fuerte represión en Corrientes sobre desocupados, docentes y empleados públicos que cortaban un puente carretero y que precipitó la convocatoria a un paro general de repudio por parte de la CTA.

**Tabla 1**  
Evolución de los promedios mensuales de conflictos laborales según periodo y características principales

Características y Tipos de conflicto	Menem Hiperinflación 07/89 al 03/91		Menem Expansión 04/91 al 01/95		Menem Crisis Tequila 02/95 al 08/96		Menem Reactivación 09/96 al 03/98		Menem Recesión 04/98 al 1/99		De la Rúa 12/99 al 12/01		Duhalde 01/02 al 05/03		Kirchner 06/03 al 12/03	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
TOTALES	89	100	88	100	74	100	61	100	54	100	70	100	52	100	29	100
Con medidas de fuerza	44	49.4	36	40.9	44	59.5	35	57.4	32	59.3	51	72.9	36	69.2	21	72.4
Con medidas no convencionales	16	18.0	25	28.4	31	41.9	30	49.2	25	46.3	39	55.7	29	55.8	17	58.6
Con huelgas	28	31.5	19	21.6	20	27.0	12	19.7	14	25.9	16	22.9	10	19.2	7	24.1
Por defensa de fuentes de trabajo *	18	20.2	20	22.7	23	31.1	21	34.4	19	35.2	25	35.7	18	34.6	8	27.6
Por atraso o aumento salarial	56	62.9	37	42.0	26	35.1	13	21.3	17	31.5	17	24.3	17	32.7	11	37.9
Por aumento salarial	46	51.7	26	29.5	3	4.1	5	8.2	7	13.0	2	2.9	5	9.6	10	34.5
Conflictos en la industria	17	19.1	15	17.0	11	14.9	6	9.8	8	14.8	9	12.9	2	3.8	3	10.3
En administración pública y servicios sociales estatales	36	40.4	38	43.2	37	50.0	24	39.3	20	37.0	27	38.6	20	38.5	10	34.5
En los servicios del sector privado	18	20.2	23	26.1	17	23.0	21	34.4	19	35.2	19	27.1	16	30.8	7	24.1
Conflictos de desocupados	0	0.0	0	0.0	1	1.4	4	6.6	3	5.6	10	14.3	12	23.1	9	31.0
Con conducciones descentralizadas	46	51.7	46	52.3	48	64.9	37	60.7	30	55.6	39	55.7	30	57.7	11	37.9
Con cuestionamientos a medidas o políticas económicas	4	4.5	7	8.0	9	12.2	7	11.5	6	11.1	15	21.4	7	13.5	3	10.3
Con medidas no convencionales como medida principal	13	14.6	15	17.0	23	31.1	23	37.7	18	33.3	34	48.6	26	50.0	14	48.3
Media mensual de protestas agitativas**	2	2.2	5	5.7	5	6.8	7	11.5	5	9.3	14	20.0	11	21.2	5	17.2

Fuente: elaboración propia sobre información de cinco diarios de tirada nacional. PICT “La constitución de sujetos sociales en la crisis: organización, identidad y acción colectiva en la Argentina” CEI-UNQ y IIGG-FCS UBA. Para referencias metodológicas sobre el relevamiento ver Villanueva (1994) y Gómez (1997). \* Incluye causas por cierres, despidos, suspensiones, defensa o mantenimiento de fuentes de trabajo, también la pérdida del beneficio de planes sociales. \*\* Incluye acciones colectivas no convencionales que perturban de algún modo el orden público, afectando a terceros no involucrados en el conflicto. Comprende los bloqueos de vías públicas, la toma de edificios públicos, los escraches o ataques a edificios o personas acampadas en lugares estratégicos, etc.

Luego de la virtual disolución de la Alianza por la renuncia del vicepresidente Alvarez, y por su deterioro progresivo ante la opinión pública, el gobierno comienza a tener necesidad de recrear apoyos, pero son buscados exclusivamente en los grupos de interés económico y en los organismos internacionales de crédito.

La subrespuesta estatal al conflicto social y a la acción colectiva tiene su punto culminante en el plan de ajuste fiscal centrado en educación y salud, que intentó llevar adelante el ministro López Murphy generando una suerte de rebelión de nivel nacional con paros de las tres centrales sindicales y una pérdida de apoyo dentro de su propio partido, lo cual forzó su rápida renuncia.

Finalmente, De la Rúa busca recrear una base de sustentación política con el regreso de D. Cavallo como ministro de Economía, apoyado ahora sí por los principales referentes políticos (Duhalde, Alvarez y el mismo Menem). Ante el pedido del flamante ministro de una tregua social y superpoderes parlamentarios, nuevamente se produjo el divorcio entre la movilización social y la dirigencia política institucional: el sindicalismo combativo ratificó un paro y en cambio la dirigencia política opositora concedió rápidamente los superpoderes y la CGT oficial levantó su convocatoria al paro, incorporándose a las mesas de acuerdos sectoriales abiertas por Cavallo. Nunca antes había aparecido una brecha tan grande entre la movilización social y el sistema político institucionalizado. El fracaso casi inmediato de la estrategia dialoguista al borde del abismo generó una sucesión de huelgas generales de las tres centrales sindicales que mostraban un nivel de enfrentamiento con el gobierno con pocos antecedentes en la historia reciente.

Los meses de noviembre y diciembre del año 2001 precipitaron la crisis bancaria y financiera. La crisis social aguda finalmente derivó en saqueos a comercios y supermercados ante los cuales no se articuló otra respuesta gubernamental que la represiva (la declaración del estado de sitio) con la esperanza de que fuera legitimada por los sectores medios temerosos del caos. Sin embargo, será la generalización de la acción colectiva entre estos mismos sectores medios los que terminarán monopolizando el protagonismo, desplazando a la acción sindical y forzando la caída del gobierno con el que se cerraba la etapa de reforma del capitalismo argentino.

#### LOS INTENTOS FALLIDOS DE REARTICULACIÓN DE LA RESPUESTA ESTATAL CONCESIVA A LA ACCIÓN COLECTIVA DESAFIANTE

El brevísimo interinato presidencial de A. Rodríguez Saá con sus anuncios alcanzó a insinuar un cambio fundamental en la orienta-

ción de las respuestas políticas estatales a la acción colectiva generalizada: concesiones activas (moratoria de la deuda externa, planes de empleo masivos, protección legal contra los despidos, etc.) y reconocimientos activos a las organizaciones sindicales y de desocupados (reunión pública con el conjunto de la dirigencia sindical y de los movimientos de desocupados) intentando aislar la poderosa protesta callejera de los sectores de clases medias (ahorristas confiscados, asambleas barriales, demandas de cambio político) y asumiendo una riesgosa distancia de los grupos de poder económico y las elites políticas tradicionales. Justamente estos dos sectores serían los que precipitarían su caída en pocos días.

El advenimiento de E. Duhalde supone un regreso a las respuestas políticas más tradicionales y menos espectaculares y polarizadoras que las de su antecesor, buscando una sintonía fina entre concesiones y reconocimientos: importantes concesiones selectivas (planes sociales) a los sectores populares más movilizados (los desocupados), búsqueda de apoyos en las elites tradicionales con especial atención en la dirigencia sindical, sobre la base de concesiones en materia de protección contra los despidos y retorno a una política de recomposición salarial. Por supuesto, el centro de estas nuevas respuestas estatales lo configuraban sectores importantes del poder económico (excluido el financiero) interesados en la devaluación del tipo de cambio y la licuación de sus deudas. Sin embargo, a pesar de la apertura de una "era de concesiones", el gobierno de Duhalde mantiene una dura política de exclusión de reconocimientos e incluso de represión y persecución a la mayor parte del espectro de sectores movilizados no sindicales: los movimientos de desocupados, de asambleas barriales, de ahorristas estafados y de fábricas recuperadas no tienen prácticamente cabida ni interlocución con el gobierno.

Esto posibilita el retorno del sindicalismo tradicional a posiciones de centralidad política por medio de un reconocimiento activo y concesiones a las demandas sindicales. El inmediato nombramiento de A. Atanasoff, un sindicalista municipal, como ministro de Trabajo y los anuncios de restitución del régimen de asignaciones familiares, y de negociaciones con las centrales sindicales basadas en la apertura de la agenda salarial y del sostenimiento de protecciones específicas contra los despidos y la flexibilización, mostraba la respuesta preferencial del gobierno al sector sindical.

En cambio, los nombramientos en las áreas de Interior, y Seguridad (Matzkin, menemista y Alvarez, belicoso ex intendente) auguraban un intento de llevar adelante una política amenazante de disuasión y control sobre la protesta social, mostrando que para las

nuevas organizaciones sociales movilizadas y el sindicalismo disidente, las políticas serían de un intimidatorio no reconocimiento activo.

El intento era claro: desactivar la movilización generalizada mediante el recurso de responder mínimamente a las demandas de los desocupados pero simultáneamente desconociendo y erosionando a las organizaciones y a los líderes que las encabezaban y quitando toda posibilidad de articulación con las demandas sindicales. Es decir, la estrategia consistía en que el Estado y las elites tradicionales (nucleadas en la Mesa del diálogo argentino) capitalizaran políticamente la esperable mejoría derivada de la universalización de los planes sociales (Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados) diluyendo el protagonismo de las innovadoras organizaciones piqueteras que se habían multiplicado por casi todo el país.

Las dirigencias sindicales tradicionales, tanto combativas como dialoguistas, se repositionaron frente al gobierno -a pesar de los problemas agudos emergentes con la devaluación- en el sentido de adherir en términos generales a la “transición política estabilizadora” y a las políticas de neutralización de las nuevas formas de acción colectiva desafiante que se desarrollaban por fuera y a veces en contra de la misma dirigencia sindical. En este esquema la recuperación de un papel principal en la negociación política<sup>9</sup> tenía el costo de resignar la acción colectiva sindical como centro de gravedad del conjunto de las reivindicaciones populares.

Sin embargo, este esquema político de neutralización de las nuevas formas de movilización colectiva contestataria padeció un notable fracaso. La conflictividad durante los primeros cuatro meses de la gestión, cuando las cuentas fiscales aun no permitían implementar las concesiones prometidas, se generalizó de manera descontrolada: los bloqueos a accesos de la capital, toma de edificios públicos, marchas y movilizaciones de ahorristas, asambleístas, contra la Corte Suprema, deudores hipotecarios, sectores del comercio, etc., no pudieron ser frenados ni siquiera con algunos atisbos represivos. Aunque el grueso de la dirigencia sindical parecía empeñarse en apelar al compromiso con el gobierno para estabilizar la situación, la dinámica de la acción colectiva desbordada corría por fuera de las estructuras sindicales.

Luego de los cambios ministeriales en mayo con el arribo de R. Lavagna a la cartera de Economía, y el de la sindicalista G. Camaño a la de Trabajo, manteniendo a Atansoff como ministro

<sup>9</sup> Es claramente aplicable en esta coyuntura la noción de Pizzorno (1977) de “intercambio político”.

del Interior, llegan los primeros cambios importantes en materia de concesiones activas: plan universal de asistencia a los desempleados, aumento salarial por decreto (de \$100 en julio), aumento de jubilación mínima a \$200 en setiembre, la devolución del 13% descontado por el gobierno de De la Rúa a los estatales a fin de año. Pero el intento de capitalización gubernamental de las concesiones excluyendo a los actores movilizadas, mediante un regreso a políticas fuertes de no reconocimiento y confrontación, terminó en el desastroso intento de represión a la protesta de desocupados en la masacre del Puente Pueyrredón: dos muertos, decenas de heridos, centenas de detenidos delante de las cámaras de TV. La generalizada ola de repudio subsiguiente hizo imposible la profundización del camino represivo y de los intentos de exclusión política de los grupos movilizadas forzando nuevas orientaciones en esta materia y apresuró el anuncio de la salida electoral.

La política gubernamental intentó entonces contener la protesta con una política activa en materia de ayuda social (el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados) y salarios, y de incorporación de las organizaciones de desocupados a las instancias de distribución de las ayudas (Consejos Consultivos). Esta ampliación de la inclusión institucional de los movimientos de desocupados alcanzó para reducir el activismo reivindicativo de las organizaciones más importantes (Federación de Tierra y Vivienda-FTV y la Corriente Clasista y Combativa-CCC) ambas vinculadas a centrales sindicales combativas. La desaceleración de la inflación, la recomposición del dólar y la mejora de la situación fiscal vía incremento de exportaciones y retenciones a las mismas, sirvieron para que comenzaran a cambiar las expectativas.

Solamente luego de que comenzaran a implementarse los planes sociales y los aumentos salariales por decreto pasada la mitad de año, empieza a reducirse drásticamente la acción colectiva, incluyendo la conflictividad laboral. Por primera vez desde el estallido de la crisis, la respuesta estatal parece ser efectiva para reducir el volumen de conflictividad social y desincentivar el recurso a la acción colectiva desafiante.

#### **EL GOBIERNO DE KIRCHNER: AMPLIACIÓN DE LAS CONCESIONES Y POLITIZACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS**

Aunque el resultado electoral de marzo del 2003 mostraba un debilitamiento por fragmentación del peronismo, el éxito económico y el encauzamiento de la conflictividad social le dieron un marco optimista. Por primera vez desde casi una década, el potente crecimiento económico y la superabundancia de recursos fiscales generaba la

posibilidad de ensayar políticas ambiciosas de concesiones activas. Pero el gobierno de N. Kirchner debía comenzar con una perceptible “insuficiencia” de legitimidad electoral (fue electo presidente con el 22% de los votos) y la pesada carga de haber sido prohijado por E. Duhalde, con las consiguientes expectativas y sospechas de “gobierno débil” dependiente del “aparato” político del peronismo y de su mentor. La ausencia de otros apoyos políticos visibles, lo convertían en un gobierno fuertemente necesitado de ampliar su sustentación y conquistar lealtades propias.

#### LA ETAPA FUNDACIONAL: SHOCK DE CONCESIONES Y REORIENTACIÓN RADICAL DE RECONOCIMIENTOS

Pronto se vería que su estrategia de obtención de consenso comenzaría por la apertura de canales de diálogo muy amplios con los sectores sociales movilizados mostrando una política novedosa de receptividad y respuesta ante los movimientos de desocupados y el sindicalismo más combativo, que la gestión de Duhalde no había tenido, temerosa de los desbordos o de perder apoyos en los factores de poder tradicionales. A las dos semanas ya se había reunido con casi la totalidad del espectro de organizaciones piqueteras y a los dos meses varias de ellas comenzaban a sumarse a la construcción política “transversal” del gobierno e incluso a la gestión estatal. Las políticas de reconocimiento se completaban con la tolerancia amplia a una protesta callejera que aún decreciendo tenía enorme repercusión mediática y política.

En esta línea de giro copernicano, sin faltarle audacia el gobierno decide despegarse de los apoyos de los poderes económicos y la dirigencia sindical tradicional practicando con ellos una política de no reconocimiento pasiva sin mayores antecedentes en nuestro país, y un discurso netamente rupturista con las políticas neoliberales. Nada como la intervención del PAMI (obra social de los jubilados) y la remoción de los representantes de la CGT oficialista de su directorio para mostrar la distancia entre las estrategias de Duhalde y de Kirchner: en el medio de un mar de suspicacias acerca de “la caja” (importante fuente de financiamiento político desde hacía décadas bajo control de la dirigencia sindical participacionista) manejada por los sectores que respondían al sindicalista ex ultramenemista Luis Barrionuevo, ícono del sindicalismo corrupto al que el gobierno no deseaba verse pegado.

Las primeras respuestas políticas estatales ofrecen una importante diferenciación de estrategia frente a los desafíos de la acción colectiva: mientras Duhalde había centrado su estrategia en el conjunto de la dirigencia sindical peronista tradicional evitando ro-

ces con los combativos y privilegiando a los dialoguistas. Kirchner, aún nombrando ministro de Trabajo a C. Tomada, un reconocido especialista en relaciones laborales vinculado históricamente a la dirigencia gremial, manifiesta una clara predilección por encontrarse con los dirigentes combativos del Movimiento de Trabajadores Argentinos - MTA, y de la CTA, al punto que no hay entrevistas con la CGT oficial<sup>10</sup>.

Otras designaciones también entraban en sintonía con las nuevas respuestas estatales: Filmus en la cartera de Educación tenía muy buena llegada al hiperactivo sindicalismo docente y Beliz en el área de Seguridad, equivalía a evitar todo escenario de confrontación con las organizaciones de desocupados y bloquear completamente la posibilidad de que se abriera un ciclo de represión/radicalización, la amenaza latente que no había logrado aventar Duhalde y que había condicionado su gobierno como una espada de Damocles.

La respuesta social del gobierno con una proliferación de planes sociales y el activismo de la ministra de Desarrollo Social contribuyó también a un cambio de expectativas para una parte importante de los sectores movilizados, sobre todo aquellos con estructuras organizativas más desarrolladas y experiencia en el uso de los canales institucionales estatales (FTV, CCC, Barrios de Pie y otros menores) sintonizaron inmediatamente con la situación creada. Hasta la radicalizada Corriente Clasista y Combativa – CCC, una de las organizaciones piqueteras más importantes, recibió con beneplácito las orientaciones marcadas por el nuevo gobierno.

Por si fuera poco, las políticas de concesiones alcanzaron algunas de las aspiraciones de las clases medias urbanas movilizadas en materia de derechos humanos, de depuración de la Corte Suprema de Justicia, y de recambio de las cúpulas militares.

Pero la política más espectacular y sorpresiva en el plano de las *concesiones* fue la multiplicación de aumentos salariales generales de suma fija por decreto, que Duhalde había comenzado a realizar tímidamente. Durante el año 2003 hubo tres aumentos salariales por decreto en momentos en que la conflictividad laboral, tanto en los sectores industriales como de servicios, estaba planchada en uno de sus pisos históricos (tabla 1). Los aumentos no fueron en forma alguna una respuesta a la movilización sindical y la acción

<sup>10</sup> Hay que recordar que la CGT no se había pronunciado por el apoyo electoral a Kirchner e incluso que la Regional Santa Cruz se negó mediante un comunicado a apoyarlo (ver diario Crónica del 20 de abril del 2003) y que incluso Moyano hizo campaña para el candidato A. Rodríguez Saá.

colectiva, ya que en ese momento los sectores descontentos cuyas protestas tenían mayor impacto seguían siendo los desocupados y los ahorristas. De esta manera tenemos un tipo de respuesta concesiva bajo la utilización de una particular estrategia de *anticipación* del conflicto. Utilizando la jerga sindical, “primerearon” con una política de ingresos que alivianara o esquivara la previsible iniciativa sindical de presión salarial. Es decir, la elevación de la fijación de salarios, la prioridad importante de la respuesta política estatal, se produce antes de que la presión reivindicativa se canalizara por la acción colectiva sindical. Los datos de 2003 muestran que las demandas de aumentos de salarios apenas estaban reapareciendo y todavía las expectativas fundamentales de los descontentos estaban ancladas en la preservación del empleo.

Si a esto le sumamos la enérgica política de congelamiento de tarifas y contención de precios mediante acuerdos administrados, y de actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, tenemos una política de ingresos de impulso acelerado a la recomposición. Más allá de la consistencia de esta *política salarial proactiva* con el modelo productivo mercadointernista y de dinamización de la demanda y el consumo internos, el retorno a una intervención sistemática estatal en la fijación del nivel de remuneraciones posee una serie de implicancias decisivas respecto de la movilización sindical.

En primer lugar, la “anticipación” al conflicto y la reacción gremial que suponen las medidas de aumento de salarios por decreto implica un claro intento de monopolizar la capitalización del consenso obtenido, sin el riesgo de dividirlo con la dirigencia sindical. Es el gobierno el que aparece ante la opinión pública como liderando la representación de los intereses de los asalariados junto a la parte aliada del espectro gremial. En segundo lugar, implica formas de neutralizar resistencias empresarias -que aspiraban al criterio noventista de negociar salarios por productividad-, empujando decididamente la negociación colectiva desde un peldaño más arriba. En efecto, la necesidad de incorporar al básico de convenio los aumentos decretados impone una negociación tripartita claramente inducida hacia arriba<sup>11</sup>. Por último y no menos importante, es la instalación rápida de nuevas expectativas de remuneraciones,

11 De acuerdo con la información de las consultoras especialistas en remuneraciones, no fue muy distinta la estrategia de aquellas empresas que gozaron de los beneficios iniciales del esquema económico devaluatorio: optaron por los aumentos y actualizaciones de sueldos antes de que comenzaran los reclamos desde mediados de 2002. Los elementos políticos

rompiendo con décadas de retracción y ajuste, lo que llevará más adelante a una reactivación de la militancia sindical por un lado y a un efecto de “privación relativa” en aquellos segmentos menos favorecidos por los aumentos (sector público administrativo, sectores de servicios no beneficiados por las políticas cambiarias, etc.).

También vale resaltar el tiempo extra de tolerancia que obtuvo inicialmente la gestión con este *shock* de concesiones: los aumentos a los privados no implicaron inmediatamente acciones colectivas de presión importante en el sector público ni tampoco desbordes en la negociación colectiva, y los anuncios gozaron de una notable aceptación por parte del mundo empresarial, en donde los conflictos son temidos por sus costos en una coyuntura expansiva.

En definitiva, las respuestas políticas estatales de concesiones y reconocimientos buscaron inicialmente sumar apoyos que dieran sustentación y grados de autonomía al nuevo gobierno. La selectividad de las respuestas de concesiones y reconocimientos indica una estrategia de conformación de una coalición de fuerzas “antineoliberales” aún en desmedro de las elites políticas (peronismo duhaldista), económicas (gran empresariado), y corporativas (sindicalismo participacionista tradicional, Iglesia y militares).

Esta estrategia inicial tuvo un éxito significativo. La conflictividad global bajó de manera notable (tabla 1): los promedios mensuales de los comienzos de Duhalde (más de 60 conflictos mensuales hasta setiembre/02) bajaron a 43 en el promedio octubre/02-mayo/03, pero el nuevo gobierno los bajó inmediatamente a 30 en los primeros tres meses, mostrando el peso coyuntural del cambio de las expectativas que abría la nueva situación política y los primeros gestos y medidas del gobierno.

Esta disminución no se explicaba tanto por los desocupados sino fundamentalmente por los sectores de servicios sociales estatales (docentes y salud) y de la administración pública provincial donde se arrastraban deudas salariales que fueron rápidamente saldadas con partidas giradas desde el gobierno nacional.

Los promedios mensuales de conflictividad pasan a ser los más bajos de toda la serie desde 1989. Pero no debe olvidarse que

implícitos en estas decisiones son importantes: no escapa a nadie que la elevadísima conflictividad social solo se hizo penosamente manejable gracias al comportamiento retraído de los trabajadores del sector privado, seguramente temerosos de que una desestabilización los hiciera perder sus empleos. Estaba claro que el mismo escenario con una conflictividad adicional generalizada en el sector privado hubiese sido institucional y políticamente inmanejable.

los niveles de combatividad permanecen altos porque el 72% de los conflictos involucran medidas de fuerza y porque casi el 59% de los mismos utiliza repertorios de protesta no convencionales. Esto supone una concentración de la conflictividad con mayores niveles de intensidad, en donde el peso relativo de los desocupados es muy grande (31% de todos los conflictos). Así, la conflictividad más significativa seguía un patrón al margen de la acción sindical (tabla 1). En materia de repertorio de acciones colectivas no convencionales, se da una suavización de las mismas: se mantienen altas la cantidad de movilizaciones y protestas ante sedes del poder político y en cambio se reducen las acciones de carácter agitado que perturban el orden público.

Este cambio no es menor, en la medida en que traduce en la acción una mayor expectativa de respuesta desde el poder político a los reclamos. Es decir, el cambio de la respuesta política estatal tiene un efecto directo sobre los repertorios de protesta, aún entre aquellos grupos minoritarios que permanecen en la oposición al gobierno (la mayoría de los partidos de izquierda y de los grupos de desocupados vinculados a ella aglutinados en el Bloque Piquetero Nacional, a los que se agregaba la organización de R. Castells, reconocido líder de desocupados).

Se producen modificaciones dentro de los repertorios: aparecen escraches o bloqueos a empresas de servicios públicos, petroleras, subterráneos, a boleterías de trenes, en estaciones de peajes de autopistas, o directamente de ministerios u organismos públicos o la legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

Esto implica modificar al menos parcialmente los escenarios de las acciones colectivas más disruptivas: de la calle y la ruta a las empresas y organismos oficiales en un intento por contrarrestar el rechazo de automovilistas y transeúntes que se multiplica en los *mass media* inquietando a la opinión pública. Asimismo, aparecen intentos de articular acciones de trabajadores de esas empresas o empleados públicos en conflicto. Los ferroviarios, las empresas recuperadas por sus trabajadores, los subterráneos y algunos conflictos de empleados públicos fueron articulando acciones con organizaciones de desocupados. Es interesante observar que en muchos casos los desocupados reclamaban la creación de puestos de trabajo genuinos en dichas empresas, lo que implica una reformulación de sus demandas.

#### MODULACIÓN POLÍTICA DE RECONOCIMIENTOS Y CONCESIONES

En el transcurso del año 2004 la estrategia inicial frente a los grupos movilizadores opositores comienza a sufrir cambios importantes.

Las protestas contra la inseguridad y el incansable trajín mediático detrás de R. Blumberg<sup>12</sup> desplazaron claramente de la agenda pública prioritaria a la cuestión social y el accionar de los grupos piqueteros quedó oscurecido por la movilización de sectores medios detrás del reclamo de seguridad. Por otro lado, el asesinato de un militante perteneciente a una de las organizaciones de desocupados adeptas al gobierno (la FTV) generó una reacción notable que incluyó la toma de una comisaría en plena ciudad capital (ya que la policía del lugar estaría involucrada con el crimen) encabezada por L. D'Elía, el líder piquetero más abiertamente aliado del Presidente.

También hay que considerar el incremento de las movilizaciones contra las empresas de servicios públicos, por los aumentos de tarifas y los ataques a petroleras, con destrozos. Finalmente los serios incidentes ante la legislatura porteña por la discusión de un código que limitaba los derechos de la protesta callejera en la ciudad, y los serios disturbios en la plaza de Mayo en ocasión de la visita del Director del FMI, hicieron que el gobierno terminara modificando la actitud inicial de tolerancia irrestricta a la protesta. Cae el ministro de Justicia, Gustavo Beliz y los temas de Seguridad pasan a la cartera de Interior y a manos de dirigentes políticos tradicionales provenientes del duhaldismo, partidarios de una represión selectiva algunos, y de una permisividad restringida o de la judicialización de la protesta, otros. El procesamiento y detención del piquetero opositor Castells, y de trabajadores desocupados que intentaron copar una planta petrolera en Caleta Olivia, fueron las muestras palmarias de estos cambios. La amenaza de represión sin armas de fuego (es decir "represión sin sangre") ante posibles desbordes significó una dura advertencia del propio Presidente Kirchner a los grupos movilizadores, ya que una represión de este tipo podría tener el apoyo de la opinión pública y los comunicadores sociales más importantes.

El gobierno había pasado desde una regulación o sintonía fina de diálogo y negociación con tolerancia amplia a la protesta, a una de regulación y sintonía fina de prevención/represión. Los grupos de desocupados que persistan en la acción colectiva opositora pasarán a ser objeto de respuestas de no reconocimiento activas y pasivas (persecución judicial, marginación en la distribución de planes sociales, etc.).

<sup>12</sup> Era el padre de un joven asesinado víctima de un secuestro extorsivo. A partir de este hecho se producen en Buenos Aires actos y acciones de protesta masivos reclamando "seguridad" y cambios en la justicia penal.

Simultáneamente, de la mano de la reunificación de la CGT en torno a la figura del combativo Hugo Moyano ahora cercano al gobierno, y con un paso al costado de los dirigentes sindicales del participacionismo histórico que ceden su figuración a una mujer (S. Rueda) en una conducción ahora colegiada, se permite al gobierno prevenir emblocamientos indeseables y al mismo tiempo generar una contraparte altamente confiable o maleable para viabilizar sin percances mayores sus políticas laborales y sociales, y superar las rispideces suscitadas por los barones de los grandes aparatos sindicales (los “gordos”) luego de las remociones en el PAMI. Asimismo, a esta altura estos dirigentes ansiosos por retomar contacto con las cúspides del poder estatal solamente podían restablecer su acceso a los decisores políticos pegándose a la figura de Moyano. El pato de la boda de este nuevo marco de entendimiento con el sindicalismo tradicional (combativos y participacionistas) es el sindicalismo renovador de la CTA que parece frustrar sus esperanzas iniciales de que este gobierno lo reconociera como organización sindical de tercer grado en pie de igualdad con la CGT, y haga suya las banderas de renovación del régimen de representación gremial y profundice su democratización y la depuración de dirigencias de la mano de su vieja reivindicación de derogación del régimen de sindicato único por rama y de libertad sindical.

El armado político del gobierno de cara a las elecciones legislativas tendía a ganar autonomía del peronismo en general y del duhaldismo en particular, lo que motivó diversos roces con dirigentes e incluso legisladores de estos sectores. Es claro que las modificaciones en la respuesta de reconocimientos al sindicalismo tradicional intenta compensar el distanciamiento de sectores importantes del justicialismo con los que finalmente terminaría confrontando electoralmente en octubre de 2005. Es así como se logra la desactivación de toda confrontación con la mayor parte de la dirigencia sindical tradicional -incluso la de connotados ex menemistas- que habían sido los más reacios al kirchnerismo.

La política global de ingresos ensayada con la conducción económica de Lavagna desacelera la intervención en materia de aumentos de salarios convencionales, aunque tanto en 2004 como en 2005 Kirchner reiteró dos nuevos aumentos de módicas sumas fijas por decreto, demostrando que aun sin el énfasis inicial se procura generar una política activa de mejoras y no meramente una política defensiva. Durante el año 2004 esta política activa se verá potenciada pero en otros frentes menos protegidos por los beneficios del crecimiento económico y por el poder asociacional de los sindicatos: convocatoria después de once años al Consejo del Salario Mínimo

Vital y Móvil que acuerda un significativo aumento a \$450, nivel que permite también impulsar la negociación salarial de los gremios más rezagados; aumento de jubilaciones mínimas; aumento para estatales con salarios menores a mil pesos; duplicación de asignaciones familiares y aumentos de fin de año para los beneficiarios de Planes Jefas y Jefes (\$50 que quedaron bautizados como “aguinaldo piquetero”).

Es claro que el gobierno apostaba a distribuir entre la población de ingresos fijos una parte de la inyección de liquidez de que goza la economía<sup>13</sup> en un contexto de estabilidad, intentando con ello simultáneamente sostener la demanda interna como palanca del crecimiento, y los niveles de popularidad del gobierno como palanca para una construcción política propia, a convalidar electoralmente.

También es notorio que el gobierno no cesa de influir en las negociaciones paritarias de salarios propiciando las cláusulas de absorción mediante las cuales los aumentos “políticos” por decreto son incorporados como aumentos a los básicos, facilitando los acuerdos y haciendo que los niveles salariales tiendan a depender en gran medida de las decisiones del gobierno<sup>14</sup>. Es decir, esta política buscaba aventar todo riesgo de escenario de lucha por la distribu-

13 La masa monetaria aumentó a un ritmo muy superior a la inflación y creció hasta llegar a niveles de récord históricos de monetización en términos de porcentajes sobre el PBI: el M1 (circulante y depósitos a la vista) pasó de 6.38 % del PBI en 2002, a 10.39 en 2004. En 1994, año de alto crecimiento, apenas estaba en 6.43%. Lo mismo ocurrió con el resto de los agregados monetarios en 2003 y 2004 (Datos del BCRA).

14 Según datos del INDEC, de los resultados de acuerdos salariales firmados en paritarias entre enero y setiembre de 2004, del total de aumentos obtenidos (\$287 promedio) un 78% son absorciones de aumentos por decreto. Las empresas apenas concedieron un promedio de \$63 de aumento adicional por sobre aquellos. Por supuesto dichos aumentos adicionales están muy concentrados en las ramas y sectores más beneficiados con la nueva política económica.

15 La dinámica de los movimientos de salarios en nuestro país se ha modificado de manera notable. Hasta mediados de los 1970 la regulación de los niveles salariales era políticamente más sencilla en la medida en que las relaciones laborales y un sindicalismo altamente institucionalizado permitían manejar niveles salariales bastante homogéneos entre ramas y sectores; esto permitía una negociación salarial bastante uniforme, donde la fuerza sindical tendía a sacar el máximo provecho de ella, arrastrando al conjunto de los trabajadores privados detrás de una negociación “testigo”, la de la Unión Obrera Metalúrgica. La privación relativa sentida por las fracciones más rezagadas del movimiento obrero organizado permitía una

ción del ingreso más allá del control político de regulación de sus efectos económicos<sup>15</sup>.

Como en el caso de los movimientos de desocupados, aquí también los resultados fueron buenos inmediatamente pero no tardaron en desatar nuevos problemas.

En efecto, se verifica un sensible cambio en el patrón reivindicativo de los conflictos protagonizados por organizaciones tanto de ocupados como de desocupados. Producto de las nuevas expectativas generadas, se reaviva luego de muchísimos años la puja por las mejoras en los salarios reales, es decir más allá de la recuperación de los efectos de la crisis y la devaluación.

La caída de los conflictos desatados por pérdida de fuentes de empleo o ingresos se complementa con un incremento perceptible durante 2003, pero aún más fuerte en los años siguientes de los conflictos por causas de aumento salarial, tanto en el sector industrial como entre los empleados públicos. De junio a diciembre de 2003 los reclamos promedio mensuales por incrementos salariales se duplicaron. Los datos para el 2004 y 2005 indican una formidable explosión que llevó a triplicar la cantidad de conflictos con este tipo de causas y a colocar la cuestión salarial como el eje excluyente de la acción colectiva, pasando a constituir el 76,3% del total de conflictos (ver datos del CISI en Etchemendy y Collier, 2007). Los conflictos en el sector público<sup>16</sup> retoman su importancia pero a ellos se les suma un considerable volumen de acción colectiva en el sector privado industrial y de servicios (Cátedra Palomino, 2007).

Por otra parte, es significativo que el cierre político preferencial con el sindicalismo peronista combativo encabezado por Mo-

---

predisposición a la lucha y al conflicto para alcanzar o aproximarse a los niveles testigo. La dispersión salarial llevada al extremo durante los 1990 llevó a un proceso inverso: una negociación propiamente no colectiva en donde la tiranía de las situaciones particulares conducía al miedo a seguir descendiendo, restando toda importancia a los básicos de convenio porque muchas empresas pagaban por encima de ellos y ya no podía ser utilizada como medida testigo. La negociación salarial se limitaba sobre todo a ir blanqueando sumas que ya se habían otorgado pero que no tenían repercusiones sobre el salario efectivo de bolsillo. Los aumentos de suma fija y el aumento sustancial del SMVyM comienzan un proceso de corrección de la dispersión salarial y lo que es más importante, someten al conjunto de los empleadores a una negociación con un piso, lo que presumiblemente evita los abusos y comienza a rejerarquizar las instancias de negociación.

16 Según el CENM los conflictos con medidas de fuerza aumentaron un 90% en 2004 respecto de 2003. El 68% de los mismos correspondieron al sector público, de la mano de reclamos de aumento salarial. Ver [www.nuevamayoria.com](http://www.nuevamayoria.com).

yano no fuera acompañado por una pérdida de autonomía en la movilización reivindicativa: los gremios con mayor activismo reivindicativo parecían ser los nucleados en este sector del MTA (recolectores, camioneros, choferes, taxistas, telefónicos) cuyos dirigentes parecían tener la mayor cercanía con el gobierno.

Hacia mediados de 2004, se hacía patente en el panorama de la conflictividad laboral una división de la problemática salarial entre las empresas beneficiadas en la coyuntura que ya habían concedido aumentos y no tenían inconvenientes en convalidarlos (grandes empresas industriales, exportadores o vinculados a las exportaciones, empresas industriales que recuperan demanda interna y aumentan su nivel global de actividad y facturación, sectores de comercialización, turismo y otros vinculados a los incrementos de ventas) y por otro, los sectores no directamente beneficiados como las empresas de servicios públicos y el transporte con tarifas congeladas; los bancos y la construcción que soportan ausencia de crédito y aumentos de costos; y los empleados públicos excluidos de algunos de los decretos de aumento, constituyeron los núcleos iniciales de la acción colectiva en el ámbito gremial. Acicateados por expectativas de equiparación, fueron protagonistas principales de la movilización salarial los trabajadores del subte, los aeronáuticos, los camioneros, los choferes de colectivos, docentes de Buenos Aires, docentes universitarios y trabajadores de la salud. En menor medida, bancarios y obreros de la construcción.

La CTA, progresivamente distanciada del gobierno, pasa a la ofensiva en materia de reclamos de equiparación salarial de los estatales, y se suman decididamente a los bancarios y los empleados públicos de varias provincias. La demora en trasladar los aumentos desde los sectores beneficiados por el crecimiento económico a estos sectores generó una reacción importante, demostrando la vitalidad y la capacidad de reclamo del movimiento obrero en sus distintas vertientes.

Algunos de estos conflictos, como el de subtes y el del Hospital de Niños, fueron impulsados por sectores alejados de la dirigencia sindical tradicional. Sin embargo, los conflictos de telefónicos, camioneros, petroleros, colectiveros, ferroviarios, bancarios y judiciales son impulsados por aquella.

Por otra parte, en ambos casos los repertorios utilizados fueron altamente combativos, apelando a medidas de acción directa, en algunos casos fuertemente disruptivas, con fuertes impactos sobre la opinión pública como la toma de edificios por once días de los telefónicos, el paro prolongado en el Hospital Garrahan, los paros sorpresivos de subtes, de recolectores de residuos, cortes de rutas de camioneros y



transportistas, paros de trenes, bloqueos a supermercados o movilizaciones a las casas matrices de algunos grandes bancos.

En el cuadro 3 puede verse un notable nivel de combatividad con utilización de medidas no convencionales como bloqueos, cortes, ocupaciones. En los últimos dos años entre el 25 y el 30% del total de los cortes de rutas o vías públicas es impulsado por organizaciones sindicales, muchas de ellas de las más importantes: camioneros, empleados públicos, petroleros, trabajadores de la salud, obreros de la alimentación, empleados judiciales, aeronáuticos. El corte de ruta deja de ser entonces un repertorio modular de los desocupados y pasa a integrar el arsenal sindical<sup>17</sup>.

Será en el año 2005 cuando los datos del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, muestren el punto más alto, el cenit de la acción colectiva reivindicativa sindical. El total de conflictos se triplica: en la industria salta de 22 conflictos mensuales en 2004 a 88 en 2005 y en el sector público de 148 a 549, cifras que constituyen récords históricos desde los años 1990. Según datos de la cartera laboral, la “salarización” de los reclamos alcanza durante 2006 al 67% en el sector público y al 54 % en el sector privado donde todavía el 22 % de los conflictos responde a problemas de estabilidad labo-

ral (MTEySS, 2007).

Parte de estos conflictos obedecen al necesario efecto de “privación relativa”, en la medida en que los beneficios de la expansión económica no se había traducido en las remuneraciones en todos los sectores. Pero una parte importante obedece al tipo de evolución de la respuesta política del gobierno en este terreno: la decisión de no elevar los salarios del sector público en la misma medida que el sector privado para preservar el superávit fiscal, los problemas presupuestarios que comienzan a padecer algunas provincias, y sobre todo la decisión de privilegiar el control de la incipiente aceleración de los índices inflacionarios que deriva en el abandono de los aumentos salariales por decreto como modo de elevar el piso de las discusiones paritarias.

Es muy importante señalar que la respuesta política gubernamental ante el renovado auge de los reclamos salariales fue sumamente benigna: escasas imposiciones de conciliaciones obligatorias, lo que tendía a dejar bastante margen para la profundización de las medidas de fuerza, incrementando la presión sobre los empresarios para negociar y además las intervenciones del ministerio de Trabajo, en muchos casos favorecieron o propiciaron acuerdos satisfactorios para los sindicatos (Etchemendy y Collier, 2007). Sin embargo, el gobierno comienza a introducir señales para poner límite a la radicalización de los repertorios de protesta sindical y selectivamente responde con inusual dureza y represión a la toma del Hospital Francés, a las movilizaciones de docentes en Santa Cruz, a los empleados de un Casino flotante y a los trabajadores de la pesca en Mar del Plata. Estos casos tienen dos elementos importantes en común: son conflictos impulsados por sectores sindicales no aliados al gobierno, y ninguno de estos conflictos tuvo por causa principal el aumento salarial sino el cierre de la fuente de trabajo, las condiciones laborales, los contratos precarios o el “salario en negro”.

A partir de 2006 el incipiente problema inflacionario inhibe al gobierno para continuar interviniendo mediante decretos. Sin embargo, continúa dando señales hacia los empleadores en el marco de las negociaciones colectivas por medio de los aumentos que propone para los trabajadores estatales que acompañan la pauta inflacionaria. Otro recurso para la limitación de las expectativas salariales es también el compromiso político de la conducción sindical de no impulsar los reclamos mucho más allá de las pautas fijadas por el gobierno. En la medida en que el gobierno reduce su intervención y además pretende poner un techo “político” a las negociaciones,

**Cuadro 3**

Tipo de acción colectiva predominante en los conflictos laborales según sector público o privado en el año 2006

Tipo de acción colectiva	Sector		Sector Privado		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Anuncios o Alertas	98	12,1	89	16,1	187,0	13,7
Movilizaciones	198	24,4	121	21,9	319,0	23,4
Paros	415	51,2	221	40,0	636,0	46,7
Cortes, bloqueos u ocupaciones de edificios	99	12,2	121	21,9	220,0	16,2
<b>TOTALES</b>	<b>810</b>	<b>100</b>	<b>552</b>	<b>100</b>	<b>1362</b>	<b>100</b>

Fuente: Dirección de Relaciones Laborales – MTEySS.

<sup>17</sup> No puede sorprendernos porque también en los orígenes de la utilización del corte de ruta encontramos a las luchas sindicales (Gómez, 2007b).

convierte la estrategia de concesiones activa anterior en una política de concesiones pasiva.

El pato de la boda de esta política moderada son los salarios que no se han beneficiado hasta ahora de la holgura de los años anteriores: sobre todo los de aquellas provincias con problemas presupuestarios que no pueden afrontar los aumentos de sus empleados. Los casos de 16 conflictos en las policías provinciales desde 2005 a 2007 grafican esta situación, al igual que los conflictos docentes y sobre todo los de los trabajadores de la salud. En el otro extremo de la conflictividad pueden situarse los trabajadores del petróleo, de la industria automotriz y en algunos casos, de la industria de la alimentación y otras que luchan por subir el umbral imponible a sus ingresos para no ser alcanzados por el impuesto a las ganancias.

Así el gobierno enfrenta la paradójica situación de ser el gobierno con menor número de paros generales (en realidad ninguno en su contra) desde la recuperación de la democracia y con un nivel de conflictividad laboral récord, incluyendo conflictos para evitar que los salarios más altos paguen impuesto a las ganancias.

El cambio en el patrón reivindicativo y de negociación convencional tiene implicancias en otro aspecto muy importante de la conflictividad y la organización de la acción colectiva: los niveles de conducción y organización que involucran los conflictos se modifican de manera notable. Caen principalmente los conflictos con conducciones descentralizadas (cuerpos de delegados, comisiones de lugar de trabajo, sindicatos de nivel local o regional) y aumentan aquellos impulsados por las direcciones nacionales gremiales. El fortalecimiento que esto produce en las estructuras sindicales y en la representatividad de la dirigencia no pueden desconocerse.

Finalmente, a partir de 2006 también se profundizan las respuestas de reconocimiento a los actores sindicales tradicionales: las necesidades de armado político para la candidatura a Jefe de Gobierno porteño en 2006 y para la candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2007 terminó de acercar al gobierno a varios exponentes del sindicalismo participacionista tradicional: A. Cavallieri, P. Lingeri y A. Rodríguez han sido los principales interlocutores del gobierno, marcando un retorno de las políticas de incentivos organizacionales o beneficios corporativos directos: la reestatización de las empresas de correo postal y servicio de aguas la llevan adelante los mismos sectores sindicales que participaron en sus privatizaciones en los años 1990, se nombran representantes de este sector en la Superintendencia de Servicios de Salud, participan en los directorios de las nuevas empresas estatales, reciben acciones en reprivatizaciones de ferrocarriles de carga, se conceden en los convenios

salariales importantes sumas para las organizaciones sindicales que los firman, se abren las listas de candidatos inclusive a cargos a ejecutivos<sup>18</sup>, entre otras. El acto del 25 de mayo de 2006, convocado por el gobierno, contó con una concurrencia masiva de las organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos, recreando de manera visible las bases de apoyo históricas del peronismo pero con claros gestos de exclusión o marginación para la dirigencia política partidaria como forma de mostrar su predominio sobre “el aparato”. El gobierno parecía embarcado en la empresa de convertir el consenso movilizado en legitimidad electoral y capital político insititucionalizado propio, pensando en el siguiente periodo de gobierno.

Sin embargo, a pesar de este importante paquete de concesiones y reconocimientos, el gobierno no logra una alineación completa del espectro sindical sino que introduce nuevos clivajes y líneas divisorias: un sector minoritario pero no despreciable (el barrionuevo) permanece en una enconada oposición al gobierno y a la conducción cegetista de H. Moyano, y otro sector de la CTA asume posiciones fuertemente opositoras generando una notable disputa interna.

#### CONCLUSIONES

Haciendo la comparación entre los diversos procesos analizados se podría intentar extraer algunas constantes en el patrón de uso de las diversas formas de reconocimiento y concesiones estatales frente a la acción colectiva contenciosa de los sindicatos. En principio debe notarse que la acción colectiva sindical misma tiende a moverse de manera oscilante en torno al eje “institucionalización/desinstitucionalización” de acuerdo con la naturaleza de las respuestas estatales de reconocimiento y concesiones. En efecto, las políticas de *subrespuesta estatal* son en general rápidamente contestadas con formas de nuevos repertorios de lucha dentro del sindicalismo organizado tradicional y con el surgimiento de nuevas organizaciones reivindicativas como los movimientos de desocupados o fábricas recuperadas. Estas oscilaciones, pueden ser esquemáticamente clasificadas en ciclos ascendentes/no convencionales y ciclos descendentes/institucionalizados. En el cuadro 4 aparece una síntesis de las relaciones entre los tipos de respuesta estatal y los ciclos de movilización en las diversas etapas estudiadas en el caso argentino.

En este esquema podemos comparar coyunturas completa-

<sup>18</sup> Es el caso del flamante intendente del importante distrito de Quilmes, Gutiérrez, histórico dirigente metalúrgico.

mente adversas para la respuesta estatal donde la recesión económica se combina con una baja en la legitimidad o apoyo al gobierno ( “críticas adversas” en el cuadro 4) con otras completamente favorables donde picos de legitimidad y apoyo se combinan con fases de crecimiento y holgura fiscal ( “favorables virtuosas”). Igualmente interesantes son las coyunturas “complejas”, en donde no hay coincidencia entre los recursos para las concesiones y las necesidades de apoyo, y las “atípicas”, donde el ciclo económico es favorable a las concesiones pero se presenta un déficit de legitimidad o apoyo.

Las coyunturas adversas muestran dos casos donde la respuesta estatal logra contener la dinámica de la acción colectiva (Menem 1998-99 y Duhalde ene/02) y dos casos fallidos (De la Rúa 2001 y R. Saá dic/01). Los dos primeros comparten elementos comunes: la prioridad a los apoyos de los poderes e intereses tradicionales pero también la búsqueda de formas pasivas de concesiones a los movilizados, tratando de evitar la agudización y la generalización de las impugnaciones. Tanto Menem como Duhalde apelaron a las políticas asistenciales y a buscar entre la dirigencia sindical apoyos o al menos impedir que éstos se sumaran a los sectores movilizados, mostrando que la falta de disponibilidad de concesiones puede ser balanceada con estrategias de reconocimiento. En este punto Menem mostró un alto grado de pragmatismo al dar marcha atrás con la flexibilización laboral para “reconciliarse” con una parte del espectro sindical.

Ambos se diferencian de De la Rúa, quien también ante la pérdida de consenso buscó resguardarse exclusivamente en el apoyo de los grupos dominantes e intentó llevar adelante una política de confrontación indiscriminada con los descontentos movilizados. El caso de De la Rúa muestra a las claras la ausencia de la necesaria sintonía fina del balance necesario entre respuestas de concesiones y de reconocimientos. La experiencia latinoamericana muestra que la crisis del neoliberalismo excluye las salidas de represión y ajuste (Gómez, 2003). La *subrespuesta* estatal de De la Rúa contrasta con la breve intentona de R. Saá: carente de apoyos y legitimidad previos, intenta una *sobrerrespuesta* estatal selectiva a las demandas del grueso de los sectores descontentos (desocupados y sindicatos) prescindiendo de los apoyos del resto de las clases subordinadas, las elites tradicionales y las clases dominantes.

**Cuadro 4**  
Respuesta política estatal según tipo de coyuntura y ciclo de acción colectiva

TIPO DE COYUNTURA	CICLO DE LA ACCION COLECTIVA DESAFIANTE	
	ASCENDENTE O DISRUPTIVA	DESCENDENTE O CONVENCIONAL
“Favorables Virtuosas” Disponibilidad de Recursos y consenso	Kirchner 2005-07 CONCESIONES ACTIVAS MODERADAS RECONOCIMIENTOS SELECTIVOS	Menem 1991-94 CONCESIONES PASIVAS RESTRINGIDAS NO RECONOCIMIENTO PASIVO
“Complejas” Consenso sin recursos	Menem 1995-97 CONCESIONES PASIVAS SELECTIVAS NO RECONOCIMIENTO ACTIVO  De la Rúa 2000 NO CONCESIONES ACTIVA NO RECONOCIMIENTO ACTIVO	Menem 1989-90 NO CONCESIONES ACTIVA RECONOCIMIENTOS ACTIVOS SELECTIVOS
“Atípicas” Recursos sin consenso	Duhalde Jul/02-Abr/03 CONCESIONES ACTIVAS RECONOCIMIENTOS SELECTIVOS	Kirchner 2003-04 CONCESIONES ACTIVAS AMPLIAS RECONOCIMIENTOS ACTIVOS AMPLIOS
“Críticas Adversas” Ni recursos ni consenso	De la Rúa 2001 NO CONCESIONES PASIVA NO RECONOCIMIENTO PASIVO  R. Saá Dic/2001 CONCESIONES ACTIVAS RECONOCIMIENTO ACTIVO  Duhalde Ene/02- Junio/02 CONCESIONES PASIVAS NO RECONOCIMIENTO ACTIVO SELECTIVO	Menem 1998-99 CONCESIONES PASIVAS RECONOCIMIENTO PASIVO

El intento de R. Saá de valorización de la acción colectiva como capital político será reeditado con mucho éxito por N. Kirchner en una situación económica con muchas mayores disponibilidades para las concesiones. En ambos casos se observa que la ausencia de estructuras políticas propias de envergadura y de vínculos más

sólidos con las elites dominantes, les dan la apariencia de “recién llegados” resistidos por el *establishment*, que los predispone a constituir su propio capital político aún buscando apoyos en los nuevos actores sociales surgidos en la crisis. Esta estrategia obedece sin dudas a que sin bases propias de poder firmemente arraigadas en el sistema político como las que podían ostentar Menem, Duhalde o el mismo De la Rúa, los márgenes de libertad frente a las elites dominantes se estrecharían enormemente, quedando prisioneros de ellas y cancelando la necesaria “autonomía relativa estatal”, fundamento de toda forma de legitimidad duradera.

Las coyunturas “brillantes” (virtuosas y favorables) de coincidencia de apoyo y recursos que unen a la etapa expansiva del Plan de convertibilidad con Menem y el espectacular crecimiento económico del Kirchner bendecido por el electorado (a partir de octubre de 2005) y la opinión pública, muestran de nuevo la importancia fundamental del capital político previo para orientar las estrategias de concesiones y reconocimientos. Menem aprovechó la disponibilidad de recursos y el apoyo popular para profundizar las políticas de reforma estructural del capitalismo ensayando una estrategia de concesiones “pasiva” de carácter preventivo mediante una oferta de compensaciones y estímulos, intentando evitar exceder un umbral de descontento que pusiera en peligro el consenso político y social sobre el avance de las reformas. Asimismo, aprovechó también para desprenderse de sus aliados sindicales en la gestión del Estado, es decir una estrategia de no reconocimiento o atenuación del reconocimiento que permitía concentrar y aumentar su control del comando político, fortaleciendo su vínculo privilegiado con las clases dominantes.

El comportamiento de Menem permite extraer una primera conclusión muy importante: la disponibilidad de concesiones y consenso o apoyo aumenta el costo relativo de la ampliación del reconocimiento, dado que obliga a distribuir entre más actores los beneficios del apoyo conseguido con las concesiones, y también obliga a compartir el poder de decisión en más temas. Cuanto mayor es el capital político y la disponibilidad económica previos con que cuenta un gobierno, menor es el beneficio esperado de aumentar el espectro de reconocimientos hacia los movilizados. Los movilizados pueden recibir concesiones pero no reconocimiento.

El caso de Kirchner es el inverso: partiendo de una situación de escasa legitimidad y consenso, el apoyo popular y la bonanza económica intentan ser convertidos en capital político al margen de las elites tradicionales, echando mano selectivamente de estrategias activas de reconocimiento y concesiones a los actores sociales

movilizados. Pero la selectividad es un rasgo fundamental de esta estrategia: las concesiones y reconocimientos a los actores que demuestran capacidades de intervención política mediante la acción colectiva no pueden ser indiscriminados, por el riesgo de diluir el control del comando político o padecer la interiorización del conflicto por demandas o intereses cruzados e incompatibles, afectando en ambos casos la necesaria “autonomía” estatal. Así, a medida que el gobierno fue ganando apoyo y legitimidad e incrementando su disponibilidad de concesiones, fue ajustando la selectividad en los reconocimientos: acercamiento al sindicalismo tradicional, incluso a los ex menemistas, y alejamiento de algunos sectores del sindicalismo renovador de la CTA y de los movimientos de desocupados radicalizados. Nuevamente se observa que el incremento de la disponibilidad de concesiones también reduce la predisposición al reconocimiento de los movilizados, ya que de esta manera monopoliza la capitalización del apoyo obtenido con las concesiones sin tener que compartirlo con otros sectores ni resignar poder de decisión. En este sentido el éxito electoral del gobierno se presenta como un inquietante desafío estratégico para las aspiraciones de los movimientos que tienen por principal recurso político la capacidad de movilización y el aprovechamiento de las necesidades de apoyo del gobierno. El fortalecimiento del gobierno puede traer secuelas de verticalización y disciplinamiento sobre los sectores movilizados que lo apoyan, sin embargo es una especificidad notable de la actual coyuntura el sostenimiento de altos niveles de actividad reivindicativa y movilización sindical. El apoyo político al gobierno no deriva en una pérdida de autonomía reivindicativa, al extremo de que los sectores más combativos son algunos de los más aliados al gobierno.

Las fases expansivas por las que atravesaron los tres gobiernos peronistas permitieron articular respuestas concesivas distintas frente a la acción colectiva: mientras Menem las utilizó para evitar o prevenir la movilización de oposición a las reformas, Duhalde intentó detener el desarrollo amenazante de las capacidades de acción colectiva, y Kirchner intentó aprovecharlas capitalizándolas políticamente y fortaleciendo la libertad de maniobra del Estado ante las clases dominantes<sup>19</sup>.

Por último resta analizar el caso de las coyunturas “atípicas”

19 El mismo A. Negri ha reconocido este punto sosteniendo que existe un New Deal sudamericano en el cual “...la movilización de las clases subalternas ya no es antagonista sino motor de los gobiernos” (Negri y Cocco, 2006: 225 y ss)

curiosas. Menem atravesó dos veces este tipo de situaciones donde tenía fuerte legitimidad y apoyo pero graves restricciones en el campo económico. Es notable que la resolución haya sido distinta en ambas. En la primera, al comienzo de su primer mandato, ensaya la implementación del programa reformista “sin concesiones” pero con una activa política de reconocimientos. En la segunda, entre 1995 y 1997 donde tuvo que lidiar con la recesión y con los costos estructurales antes ocultos de la consolidación del modelo, utiliza concesiones pasivas para frenar las “puebladas” y los nacientes movimientos de desocupados, al tiempo que afronta el peor momento de confrontación con el movimiento obrero en todas sus vertientes. Como la dinámica del conflicto caía fuera del control sindical, los costos del reconocimiento hubiesen sido seguramente mayores a sus beneficios, y lejos de permitir el “ahorro” de concesiones las hubiese acentuado. Posteriormente, al caer el apoyo al gobierno y ante el riesgo de aislamiento, Menem tuvo que retroceder y ofrecer algunas concesiones a los sindicatos y formas de reconocimiento al final de su mandato. Esta disparidad de soluciones solo se explica por el cambio de la naturaleza de la acción colectiva: el paso hacia un ciclo ascendente no convencional también condiciona notablemente la respuesta estatal. Una conclusión importante en este punto es que las coyunturas críticas han obligado a políticas de reconocimiento o concesiones aún a los gobiernos más neoliberales. Evidentemente la imposibilidad política de soluciones represivas al desafío de la acción colectiva no institucionalizada no deja muchas salidas a la respuesta estatal y además aumenta la intolerancia popular a los ajustes.

Una coyuntura aún más “extraña” es la de la reactivación económica notable entre los últimos meses de 2002 con Duhalde y el primer año de Kirchner, donde la debilidad en términos de legitimidad y apoyos era notoria para ambos pero coexistía con la posibilidad de ejercer una política activa de concesiones. Las resoluciones inversas de ambos para el problema fueron notorias y más allá de factores ideológicos y estilos personales no puede soslayarse la variable del capital político previo: Duhalde buscando resistir los embates de la acción colectiva disruptiva fortaleciendo sus lazos con gran parte de las elites dominantes (excluyendo al “capital financiero”), y Kirchner intentando capitalizarla a su favor de manera selectiva para evitar justamente ser cautivo de los sectores dominantes, demostrando nuevamente que la necesidad de capital político facilita la predisposición al reconocimiento de los movilizados.

#### BIBLIOGRAFÍA

- Auyero, Javier 2002 *La Protesta. Retratos de la beligerancia popular en la argentina democrática* (Buenos Aires: Libros del Rojas).
- Battistini, Osvaldo 2002 “Transformaciones culturales en el trabajo y acción sindical: un juego de intereses contradictorios”, en Arturo Fernández (comp.) *Sindicatos, crisis y después* (Buenos Aires, Ed. Biebel).
- Bunel, Jean 1992 *Pactos y Agresiones. El sindicalismo argentino ante el desafío neoliberal* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Cátedra Palomino (comps.) 2007 “De la Protesta social al conflicto sindical” en Primer Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo (Buenos Aires: Carrera de Relaciones del Trabajo)
- Centro de Estudios Legales y Sociales 2003 *El Estado frente a la protesta social 1996-2002* (Buenos Aires: CELS/SigloXXI).
- Danani, Claudia y Lindemboim, Javier 2003 “Trabajo, política y políticas sociales en los ‘90” en Lindemboim y Danani (coords.) *Entre el trabajo y la política. Las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada* (Buenos Aires: Biblos).
- De la Garza, E. (ed.) 2000 *Reestructuración productiva, mercado de trabajo y sindicatos en América Latina* (Buenos Aires: FLACSO).
- Della Porta, Donatella 1999 “Movimientos Sociales y Estado: algunas ideas en torno a la represión policial de la protesta” en Dough McAdam, John McCarthy y Mayer Zald (eds) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (Ed. ISTMO: Madrid).
- Deppe, R., Herding, R., y Hoss, D. 1991 “Relación entre acción sindical y los partidos políticos” en Crouch, C. y Pizzorno, A. (comp.) *El resurgimiento del conflicto de clases en Europa occidental a partir de 1968* (Madrid: Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España).
- Etchemendy, Sebastián 2001 “Construir coaliciones reformistas. La política de las compensaciones en el camino argentino hacia la liberalización económica” en Revista *Desarrollo Económico* (Buenos Aires: IDES) Vol. 40, N°160.
- Etchemendy, Sebastián y Collier, Ruth 2007 “Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007) (mimeo) publicado en *Politics*

- and Society* (California University) N°2 Setiembre/07.
- Fernández, Arturo 1985 *Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-1982)* (Buenos Aires: Centro de Editores de América Latina).
- Fernández, Arturo 1988 *Las prácticas sociopolíticas del sindicalismo (1955-1985)*, (Buenos Aires: CEAL) 2 tomos.
- Fernández, Arturo 1998 *Crisis y decadencia del sindicalismo argentino. Sus causas sociales y políticas* (Buenos Aires: Centro de Editores de América Latina).
- Fraga, Rosendo 1991 *La cuestión sindical* (Buenos Aires: CENM).
- Fraga, Rosendo 2005 "El escenario político post-electoral" en *Cuadernos de la Argentina Reciente*, (Buenos Aires) N°1.
- Godio, Julio y Wachendörfer, Achim 1991 "Sindicatos y partidos políticos. Experiencias de relaciones sindicatos-partidos en Europa y América Latina", en *Cuadernos de Debate Sindical* (Buenos Aires: Fundacion Ebert) N°19.
- Godio, Julio 2002 *Argentina: en la crisis está la solución* (Buenos Aires: Ed. Biblos).
- Kriesi, Hans 1999 "La estructura organizacional de los NMS en su contexto político" en Dough McAdam, John McCarthy y Mayer Zald (eds) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, (Ed. ISTMO: Madrid).
- Gamson, W. y Meyer, D. 1999 "Marcos interpretativos de la oportunidad política", en Dough McAdam, John McCarthy y Mayer Zald (eds) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, (Ed. ISTMO: Madrid).
- Gomez, Marcelo 1997 "La Conflictividad laboral durante el Plan de Convertibilidad en la Argentina (1990-1994). Las prácticas de lucha sindical en una etapa de reestructuración económica y desregulación del mercado de trabajo", en *Revista Estudios Sociológicos* (México: Colegio de México) N°45/97.
- Gomez, Marcelo 2002 "Crisis del capitalismo, formas de conciencia y resurgir de la acción colectiva" en *Revista Theomai*, Num. Especial, Invierno 2002.
- Gomez, Marcelo 2003 "Social movements and collective action in Latin America: some questions on the potential political transformer of the masses' interventions" en *Revista Theomai*, N° 7, first semester of 2003.
- Gomez, Marcelo 2003 "La conflictividad laboral después de diciembre del 2001: cambios en la acción reivindicativa y nuevo marco político" en Informe de Coyuntura Laboral de la Asociación Argentina de Especialistas de Estudios del Trabajo, [www.aset.org.ar](http://www.aset.org.ar), publicación electrónica.
- Gomez, Marcelo 2006 "Crisis y recomposición de la respuesta política estatal ante la acción colectiva desafiante en la Argentina 1989-2004" en *Revista Argentina de Sociología* (Buenos Aires) N°15.
- Gomez, Marcelo 2007 "Origen y desarrollo de los repertorios de la acción colectiva reivindicativa 1994-2003" en Villanueva, E. y Massetti, A. *Movimientos Sociales y Acción Colectiva en la Argentina hoy* (Buenos Aires: Prometeo).
- Gomez, Marcelo 2007 "De la protesta social al conflicto sindical" en *Catedra Palomino op.cit.*
- Hyman, Richard 1991 "Estructura profesional, organización colectiva y militancia laboral" en Crouch, C. y Pizzorno, Alessandro (comp.) *El resurgimiento del conflicto de clases en Europa occidental a partir de 1968* (Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España).
- Hyman, Richard 1996 "Los sindicatos y la desarticulación de la clase obrera", en *Revista de Estudios del Trabajo* (Buenos Aires:ASET) Año 2, Nro.2.
- Iacona, Juan y Pérez, Sandra 2000 "La conflictividad laboral en el inicio y en el epílogo del gobierno de Menem. Fotografías en movimiento de un tiempo vertiginoso", ponencia III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Buenos Aires, Mayo/2000.
- Iñigo Carrera, Nicolás 2003 "La insurrección espontánea. Argentina Diciembre/01. Descripción, periodización, conceptualización" en *Documentos y Comunicaciones PIMSA* (Buenos Aires:PIMSA).
- Laufer, R. y Spiguel, C. 1999 "Las puebladas argentinas a partir del "santiagueñazo" de 1993. Tradición histórica y nuevas formas de lucha", en Margarita Lopez Maya (ed.) *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en A. Latina en los años de ajuste* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Levitsky, Steven 2003 *Transforming labor based parties in Latin America. Argentine peronism in comparative perspective* (Cambridge University Press).
- Levitsky, Steven 2001 "Una desorganización organizada: organización informal y persistencia de estructuras partidarias locales en el peronismo argentino" en *Revista Ciencias Sociales* (Buenos Aires:UNQ) N°12.
- Marshall, A. y Cortés, R. 1991 "Estrategias económicas, intervención social del Estado y regulación de la fuerza de trabajo. Argentina 1980-1990" en *Revista Estudios del Trabajo* (Bue-

- nos Aires:ASET) N°1.
- Marshall, A. y Cortés, R. 1999 “Estrategia económica, instituciones y negociación política en la reforma social de los ‘90” en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires: IDES) N°154.
- Marshall, A. y Perelman, L. 2002 “Estructura de la negociación colectiva en la Argentina: ¿avanzó la descentralización en los años noventa?” en *Estudios del Trabajo* (Buenos Aires: ASET) N° 23.
- Matsushita, Hiroschi 1999 “Un análisis de las reformas obreras en la primera presidencia de Menem: la perspectiva de opción estratégica”, en Senén González, S. y Bosoer, F. *El Sindicalismo en tiempos de Menem* (Buenos Aires:Corregidor).
- Merklen, Denis 2005 *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática argentina 1983-2003* (Buenos Aires: Gorla).
- Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social – MTEySS (2007) “Estadísticas de conflictos laborales” Dirección de Relaciones Laborales disponible en <http://catedrapalomino.googlepages.com/MTEySS/preentacionyconflictos2007.pdf>
- Murillo, Victoria 1997 “La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la primera presidencia de Menem” en *Revista Desarrollo Económico* (Buenos Aires: IDES) Vol 37, N°147.
- Neffa, Julio (comp.) 1994 *Nuevo paradigma productivo, flexibilidad y respuestas sindicales en América Latina* (Buenos Aires: Ed. Asociación Trabajo y Sociedad).
- Negri, A. y Cocco, G. 2006 *Global. Biopoder y luchas en una América Latina globalizada*, (Buenos Aires: Ed. Paidós).
- Offe, Claus 1996 *Partidos Políticos y Nuevos Movimientos Sociales* (Madrid: Ed. Sistema).
- Offe, C. y Wiesenthal, H 1992 “Dos lógicas de la acción colectiva” en *La gestión política* (Madrid:MTySS).
- Palermo, Vicente 1999 “¿Mejorar para empeorar? La dinámica política de las reformas estructurales argentinas”, en Torre, J. C., Palermo, V, y ot. *Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado* (Buenos Aires: Ed. Norma).
- Palermo, Vicente y Novaro, Marcos 1996 *Política y poder en los tiempos de Menem* (Buenos Aires: Tesis Norma).
- Palermo, V. y Etchemendy, Sebastián 1998 “Conflicto y concertación. Gobierno, congreso y organizaciones de interés en la reforma laboral del primer gobierno de Menem” en *Revista Desarrollo Económico* (Buenos Aires: IDES) Vol. 37 N° 148.
- Palomino, Héctor 1995 “Quiebres y rupturas de la acción sindical: un panorama desde el presente sobre la evolución del movimiento sindical en la Argentina”, en Acuña y ot. *La nueva matriz política Argentina*, (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Pizzorno, Alessandro 1991 “Intercambio político e identidad colectiva en el conflicto laboral” en Crouch, C. y Pizzorno, Alessandro (comp.) *El resurgimiento del conflicto de clases en Europa occidental a partir de 1968* (Madrid: Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España).
- Pizzorno, Alessandro 1978 “Economía y política en la acción sindical” en *Cuadernos de Pasado y Presente*, (México).
- Pasquini, L y Remis, C 2002 “La lógica política del corte de ruta en la Argentina. Estrategias de lucha e identidad” en *Revista Estudios del Trabajo* (Buenos Aires: ASET) N°24.
- Portantiero, Juan C. 1995 “Menemismo y peronismo: continuidad y ruptura” en *Peronismo y Menemismo*, (Buenos Aires: Ed. El Cielo por asalto).
- Sidicaro, Ricardo 2002 *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina 1989-2001* (Buenos Aires: Eudeba).
- Svampa, M. y Pereyra, S 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras* (Buenos Aires: Biblos).
- Tarrow, Sidney 1997 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, (Madrid: Alianza).
- Tarrow, Sidney 1999 “Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales” en Dough McAdam, John McCarthy y Mayer Zald (eds), op. cit.
- Tilly, Charles 1991 “Conflicto político y cambio social”, en *VVAA Teoría de los Movimientos sociales*, (Buenos Aires:Cuadernos de Ciencias Sociales-FLACSO).
- Torre, Juan C. 1999 “Las reformas de mercado y el sindicalismo en la encrucijada” en Senén González, S. y Bosoer, F. *El Sindicalismo en tiempos de Menem* (Buenos Aires: Corregidor).
- Villanueva, Ernesto (comp.) 1994 *Conflicto Obrero, Transición política, conflictividad obrera y comportamiento sindical en la Argentina 1984-1989* (Buenos Aires: Ed. Universidad Nacional de Quilmes).
- Villanueva, E. y Gomez, M. 2001 “Conflictividad laboral y protesta social: cambios en las estrategias de lucha ante la exclusión” en *Taller-Revista de Sociedad, Política y Cultura*, (Buenos Aires) N°15.
- Zapata, Francisco 1986 *El conflicto sindical en A. Latina* Ed. El Colegio de México, México.